

AMÉRICA LATINA EN LA POSTGUERRA FRÍA: LA NUEVA RECONFIGURACIÓN SOCIO-POLÍTICA REGIONAL

Carlos OLIVA CAMPOS¹

■ **RESUMEN:** El artículo procura comprender los estallidos sociales y los cambios políticos que comenzaron a vivirse en la América Latina en las dos últimas décadas, para demostrar que ellos han sido la expresión tanto del agotamiento de estructuras tradicionales de poder, incapaces de dar respuesta a las demandas de la inmensa mayoría de la población latinoamericana, cuanto de la emergencia de importantes movimientos sociales y fuerzas políticas. Para eso el trabajo evaluó los factores de cambio, objetivos y subjetivos, que han generado una nueva configuración socio-política en América Latina, a inicios del siglo XXI; caracteriza el mapa ideopolítico definido en la región, tras el ciclo electoral 2005-2006; y proyecta, en la perspectiva del próximo ciclo electoral 2008-2009, qué fuerzas ideopolíticas deben predominar. Por fin, especula acerca de las implicaciones que esos procesos pueden tener, tanto para las fuerzas más progresistas y para los movimientos sociales en la región, como para las relaciones de América Latina con Estados Unidos.

■ **PALABRAS CLAVE:** América Latina. Guerra-Fría. Neoliberalismo. Crisis de la izquierda. Resistencia. Nuevos actores sociales.

Introducción general. Los antecedentes y condicionantes históricos

América Latina vive hoy uno de los períodos más interesantes y a la vez más convulsos de su historia reciente. Interesante,

¹ Presidente de la Red de Integración de América latina y Caribe (REDIALC). Havana – Cuba. 10 400.

porque la fisonomía sociopolítica regional ha cambiado incuestionablemente. Convulso, por el derrumbe de no pocos paradigmas tradicionales que, lejos de facilitar los cambios ocurridos, complican el parto de un nuevo horizonte regional. Por ello el tratamiento del tema desde una perspectiva histórica puede contribuir a ordenar la evolución de los acontecimientos y avanzar hacia el encuentro de algunas respuestas pendientes.

De la revisión de los escenarios precedentes se recuperan tres procesos históricos como principales antecedentes a considerar: 1) los desenlaces de la llamada crisis centroamericana de los años ochenta; 2) el proceso de democratización regional que se activa a mediados de los años ochenta en América Latina; 3) el derrumbe de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa Oriental.

Cada uno de estos procesos históricos acumula una amplia y variada bibliografía, lo que permite evadir exposiciones detalladas e ir directamente a la identificación de aquellos factores que explican sus conexiones con la actual situación regional.

La crisis centroamericana de los años ochenta fue fruto de una larga historia de subdesarrollo, miseria, intervenciones militares, tutelaje estadounidense y explotación desmedida de los recursos naturales de la sub-región y de la inmensa mayoría de su población por parte de las empresas transnacionales y la oligarquía nativa. Las soluciones, artificiales, triunfaron debido al agotamiento de las fuerzas en pugna y a un universo de factores objetivos y subjetivos resultantes, tanto de las políticas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, como de los errores, antagonismos y contradicciones al interior de las fuerzas guerrilleras y el gobierno sandinista. Como es conocido, tras largos años de guerra, en los casos de El Salvador y Guatemala triunfaron procesos de negociaciones en los cuales se pactó la paz, pero las aspiraciones de justicia social y de transformaciones socioeconómicas que favorecieran a la mayoría de la población quedaron indefinidamente pospuestas.

Tal vez, como mejor ejemplo de todo lo que perdió el movimiento revolucionario centroamericano, tenemos el caso histórico de la Revolución Sandinista, derrotada por medio de elecciones democráticas, cuestión no esperada por sus dirigentes. Ese golpe demoledor para los revolucionarios centroamericanos dejó muchísimas interrogantes y otras tantas lecciones para el futuro, que no pueden ser desestimadas. El sandinismo que

hoy regresó al gobierno no es el mismo de ayer. El proceso de construcción de una nueva fuerza política encabezada por el sandinismo de Daniel Ortega demandó no pocas respuestas y explicaciones, impensadas a inicios de los años 1990. Pero entrar a hacer juicios, sin considerar los cambios de época y los factores económicos, políticos y sociales de la Nicaragua de hoy y del contexto latinoamericano que se abrió a finales del siglo XX, nos podría conducir a conclusiones irreales y erradas.

El segundo antecedente histórico que debemos considerar es el proceso de democratización regional que, aparentemente, se activó tomando como punto de inflexión la derrota militar argentina en la guerra de las Malvinas, de abril-junio de 1982. La revisión de los acontecimientos acaecidos demostró cómo las transiciones de gobiernos militares a civiles que se sucedieron, fueron el resultado de procesos políticos internos, expresión del agotamiento de los proyectos castrenses. La activación del proceso desencadenó una sucesión de transiciones de gobiernos militares a civiles en Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay; a los que se sumaron otros con posterioridad. De una historia tan bien conocida deben ser rescatados algunos hechos, por ejemplo, que el modelo democrático emergente de estas transiciones, controladas por las dictaduras militares, resultó funcional a los intereses de los Estados Unidos hasta el punto de que fue aplicado, por supuesto con sus particularidades, en países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala; e incluso en el Caribe, con el caso de Haití².

Hay otro hecho importante a destacar: muchas de las fuerzas políticas revolucionarias emergieron a la democracia bastante lesionadas por los cruentos años de la dictadura, produciéndose no pocas divisiones internas que en nada favorecieron sus opciones políticas electorales; a diferencia de otras fuerzas políticas tradicionales de derecha que no han sido tan golpeadas por los años de dictaduras militares.

El tercer tema, obviamente con el impacto global que no alcanzaron los anteriores, tuvo implicaciones para todo el sistema internacional, para la correlación de fuerzas entre las grandes potencias, para las fuerzas de izquierda y para las fuerzas de la derecha más conservadora en el plan mundial, liderada por los Estados Unidos. Escepticismo, hipercriticismo, concesiones ideológicas y reinterpretaciones de la realidad políti-

² Un análisis del proceso de democratización regional de los 1980 puede encontrarse en Oliva (1994).

ca, coincidentes con partidos de «centro-derecha», estuvieron entre las enfermedades que se hicieron más evidentes dentro de las fuerzas de la izquierda en la región. Lamentablemente, la reflexión madura, sin dejar de ser autocrítica, tuvo que ser construida o tal vez mejor decir reconstruida, con más lentitud de lo deseado, siendo un proceso aún hoy inconcluso. Pero es evidente que la izquierda latinoamericana cerró un capítulo de su historia y abrió otro con la “caída del Muro de Berlín”. Capítulo que tampoco ha sido concluido.

¿Qué conclusiones sacar de estos tres grandes temas, a los efectos del problema de investigación que abordamos?

En primer lugar, que se originó un notable cuestionamiento de la lucha revolucionaria por la vía de las armas, dadas las grandes lecciones extraídas de Centro América. Después de lo acontecido, el movimiento guerrillero colombiano quedó, prácticamente, como el único beligerante en la región, de acuerdo con las características tan particulares de la crisis estructural que vive ese país. En segundo lugar, ante el evidente agotamiento de la gestión gubernamental de los militares, la opción democrática fue re-legitimada, abriéndose así nuevos espacios de participación para fuerzas políticas que antes no podían acceder a la lucha electoral con condiciones de triunfo. Este hecho se vio fuertemente favorecido por la emergencia de actores sociales, que nuevos o no, fueron expresión de un replanteamiento generalizado de la sociedad latinoamericana en reacción a la tremenda deuda histórica acumulada contra ella. En tercer lugar, el nuevo panorama político regional se nutrió, igualmente, de la crisis de las “izquierdas” y de la crisis de representatividad de los partidos políticos tradicionales, creándose las condiciones para el surgimiento y desarrollo de nuevas tendencias políticas que, al menos en su proceso de construcción, se mueven en el amplio diapasón de la “centro-derecha” hasta la izquierda llamada radical. En cuarto lugar, fue la convergencia excepcional de una amalgama de factores endógenos y exógenos, dado que el proceso de transición a la democracia se fortaleció con la caída del sistema socialista este-europeo y el rescate, dentro del discurso político internacional, de importantes paradigmas como la defensa de la democracia y de los derechos humanos. En quinto lugar, como resultado de la búsqueda de nuevos horizontes políticos, se abrió una amplia agenda, no exenta de contradicciones. En un nivel más general, aparecieron los temas de la lucha contra la globalización,

el neoliberalismo y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Un segundo nivel profundizaba éstas contradicciones con una ruptura del sistema de dominación hemisférica de Estados Unidos. Mientras que en un tercer nivel han quedado las cosas planteadas en términos de la sustitución del sistema capitalista por otro socialista, que aparece en un lugar destacado del discurso político de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, como el proyecto de socialismo para el siglo XXI.

Como ya se enunció, el panorama económico regional se desdobló en diferentes aristas; de una parte, se hizo evidente el auge del neoliberalismo, política económica que ha traído traumáticas consecuencias para muchos de los países de la región; de otra, con el lanzamiento de la llamada Iniciativa para las Américas, en junio de 1990, por el presidente George Bush padre, se fue consolidando la idea de crear una Área de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) como base para el proyecto de Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), proyecto en el cual Estados Unidos pretendió involucrar a todo el continente, con la excepción de Cuba.

Como parte del escenario global, América Latina recibió los impactos de la nueva tríada de poder mundial que, descrito en forma esquemática pero gráfica, aparece conformada por las grandes empresas transnacionales, por los gobiernos neoliberales – garantes de la privatización de los recursos naturales y la desnacionalización y descapitalización de nuestros países – y por los organismos internacionales, al estilo del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para el caso de la región el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este nuevo poder internacional encontró resonancia, apoyo y subordinación en los grandes capitales latinoamericanos que se adaptaron a la nueva lógica imperante.

Resumiendo, los profundos cambios internacionales impactaron fuertemente la América Latina, en momentos en que la región no podía controlar la tremenda acumulación de problemas económicos, sociales y, en consecuencia, políticos, que comenzaron a expresarse primero en reacciones aparentemente aisladas y después en su verdadera dimensión regional. Los estallidos sociales y los cambios políticos, que comenzaron a vivirse en la región desde finales del siglo XX, han sido la expresión del agotamiento de las estructuras tradicionales de poder, incapaces de dar respuesta a las demandas de la inmensa mayoría de la

población latinoamericana e importantes movimientos sociales y fuerzas políticas emergentes, que han pasado a protagonizar el escenario regional de inicios del nuevo siglo.

Un problema de investigación tan abarcador, como el que se ha descrito, demanda de aproximaciones más puntuales que permitan ordenar y periodizar etapas. En este sentido, considerando que por el desarrollo y desenlaces de acontecimientos muy importantes que tuvieron lugar, se centró la atención en el ciclo electoral 2005-2006 debido a que marcó un punto de inflexión en todo ese proceso de reconfiguración regional que recorre la región. Tras colocar esas reflexiones generales, se despliega como hipótesis de trabajo, que los procesos electorales ocurridos entre el 2005 y el año 2006 demostraron con mayor claridad la correlación de fuerzas que venía revelando el nuevo mapa político-ideológico regional; donde se ha producido un corrimiento, tanto de fuerzas de derecha como de izquierda, hacia posiciones más “moderadas”; mientras que se han ido identificando con los postulados del proyecto ALBA, aquellos procesos políticos, que por su trayectoria van asumiendo determinados cambios estructurales y transformaciones sociales, que los han llevado a romper con la institucionalidad anteriormente establecida, planteándose nuevos horizontes emancipatorios que tienden ya, en buena medida, a articularse bajo la lógica de un pensamiento socialista para el siglo XXI.

En correspondencia con la hipótesis planteada, fueron definidos los siguientes objetivos: 1) Evaluar los factores de cambio, objetivos y subjetivos, que han generado una nueva reconfiguración socio-política en América Latina, a inicios del siglo XXI; 2) caracterizar el mapa ideo-político definido en la región, tras el ciclo electoral 2005-2006; 3) proyectar, en la perspectiva del próximo ciclo electoral 2008-2009, qué fuerzas ideo-políticas deben predominar; así como las implicaciones que esto pueda tener, tanto para las fuerzas más progresistas, como para los movimientos sociales en la región; así como para las relaciones de América Latina con Estados Unidos.

Una aproximación general a los nuevos actores sociales y políticos emergentes

Mucho se ha escrito sobre los años 1980, la llamada “década perdida” de América Latina, con sus catastróficos indicadores socio-económicos, recibiendo como alternativa un despiadado neoliberalismo que acabó de descapitalizar y desnacionalizar nuestras economías (VILABOY, 2006; MARTÍNEZ, 2002). Este desalentador panorama, que no olvidemos se desarrolló en medio de la transición internacional de la Post Guerra Fría – cuyo eje articulador fue la caída de la URSS y los países socialistas este-europeos –, se desplegó en los marcos de un escenario hemisférico en nada favorable a las alternativas de algunas “izquierdas” latinoamericanas en franca crisis existencial y la reafirmación del poder de las oligarquías tradicionales, estrechas aliadas de Estados Unidos. Por eso no puede dejar de prestarse atención al llamado “Caracazo” de 1989 y mucho menos al intento de golpe militar del coronel Hugo Chávez, en 1992. Se pudiera afirmar, trazando una parábola entre la historia pre-revolucionaria de Cuba y los acontecimientos referenciados, que ambos hechos fueron importantes “aldabonazos” para lo que sobrevendría con posterioridad en Venezuela, pasando a ser un importante antecedente de los acontecimientos que ocurrirían con posterioridad.

La emergencia de ese amplio, diverso y generalizado universo de movimientos sociales, implicó de hecho un replanteamiento de la matriz societal latinoamericana, en tanto verticalizan, sectorialmente, la defensa de sus propias identidades, reivindicaciones históricas y demandas, en programas de acción muy concretos, que trascendieron primero su propio ámbito, pasando de lo local a lo nacional y de ahí al ámbito regional, mediante redes, alianzas y foros internacionales para intercambiar experiencias similares de lucha y debatir alternativas sociales y políticas. De ese universo social destacan los movimientos étnicos – principalmente indígenas – campesinos, medioambientalistas, desempleados, religiosos, homosexuales y sindicalistas, entre muchos otros. Este nuevo universo social ha levantado, con denodada fuerza, las banderas de lucha contra la globalización neoliberal y, en el caso de nuestro hemisferio, contra el neoliberalismo y el ALCA.

También se hizo evidente que ese universo social emergente se presentó muy crítico y desconocedor, en primer lugar, del poder tradicional detentado en la región por la oligarquía de siempre, hoy neoliberal, subordinada al capital transnacional y los nuevos intereses estratégicos definidos principalmente por Estados Unidos. Pero, en correspondencia con esto, fue igualmente crítico del sistema de partidos políticos tradicionales, los cuales dejaron de ser sus referentes electorales y los canales idóneos de sus demandas económicas, sociales y políticas. Eso explica que se repitieran en Ecuador, Bolivia y Argentina, desde el final del siglo XX, protestas sociales de envergadura no calculada, teniendo como desenlace la caída de presidentes y gobiernos, abriendo las puertas electorales a un conjunto de nuevas fuerzas políticas, que hasta entonces no habían podido alcanzar esa meta.

Ese universo social emergente ha quedado bien delimitado en relación con el crucial tema de pasar de oposición a gobierno, determinándose dos grandes grupos de actores: los que se mantuvieron en el ámbito de la resistencia al poder tradicional, por limitaciones propias debido a su insuficiente organización interna, la falta de definiciones políticas en cuanto a sus metas y posibles alianzas con otros actores, e insuficientes niveles de vinculación con otras fuerzas afines para articularse nacionalmente, aún siendo movimientos nacionales; y aquellos otros que sí avanzaron hasta la articulación con fuerzas políticas que lograron asumir el gobierno. Por supuesto, para hacer ésta división evitando esquematismos, hay que tomar muy en consideración los orígenes de los diferentes actores, sus programas de acción y los métodos utilizados para reclamar sus reivindicaciones.

A estos últimos vamos a dedicar algunas reflexiones, desde dos dimensiones, la del gobierno y la del poder, apreciando posteriormente como se diferencian e identifican las diversas variables a describir.

Al reflexionar sobre algunos de los más importantes actores sociales emergentes, resalta el tema del movimiento indígena, por la deuda histórica de siglos que se acumula en su contra, su peso poblacional, cultural y histórico. En este sentido, un primer caso a mencionar es la movilización de etnias indígenas agrupadas en el sur de México en torno al llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), movimiento que conmocionó a la sociedad mexicana, cuando se dio a conocer a inicios de 1994, en

el mismo momento en que estaba entrando en vigor el TLCAN y el país se estremecía por el asesinato del candidato presidencial Luis Donald Colossio. Los zapatistas han transitado por diferentes etapas en este largo andar de más de una década. Primero reivindicaron la lucha armada, pasando por la búsqueda de legitimación política nacional y buscando articularse como una alternativa política frente a la crisis del sistema político mexicano. Más recientemente, en medio del proceso electoral de 2006 se planteó el no interés por la toma del poder político y sí por la organización de una plataforma nacional de los pueblos indígenas de México (ORTEGA, 2005). A esta estrategia de lucha – para algunos, original; para otros, no muy entendible –, se unieron otras experiencias indígenas diferentes, algunas de mucha mayor trascendencia, en otras áreas del hemisferio, en particular en la región andina.

Para entender la magnitud de esa repercusión, baste recordar como un importante movimiento indígena ecuatoriano, agrupado bajo las banderas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y organizado políticamente en un partido, Pachakutik, fue capaz de desplazar del poder, con movilizaciones y protestas sociales organizadas, a dos presidentes en ese país, Jamil Mahuad, en 1999, y Abdalá Bucaram, en 2001. Y el caso más reciente y significativo es el del movimiento indígena en Bolivia, país en el cual un ascendente y bien organizado proceso de protesta social obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en el año 2003, y a su sucesor, Carlos Mesa, en el 2005; llevando a un amplio triunfo electoral al líder cocalero Evo Morales, devenido primer Presidente indígena de ese país.

En la historia acumulada por el movimiento indígena latinoamericano en su etapa actual, hay que destacar dos grandes momentos: uno, de negativas consecuencias y con mucho para reflexionar, referido al cogobierno con el ex-Presidente Lucio Gutiérrez, que terminó en un conflicto entre ambas partes y la profunda división del movimiento indígena, aún no superada; el otro, el triunfo electoral del dirigente cocalero boliviano, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien inició un gobierno multisectorial, pero de raíz indígena, en una nación “poscolonial” como Bolivia³.

³ Se asume el calificativo en referencia a todos aquellos de nuestros países que dado el fuerte componente indígena en sus sociedades, la real solución a sus problemas pase, entre otros factores, por el reconocimiento de los derechos políticos, económicos y sociales de esos pueblos; el derecho a la tierra

Unido a la presencia de un actor social tan importante como el movimiento indígena, y desde otro ámbito social, se han destacado las luchas reivindicatorias de los trabajadores desempleados; en particular en Argentina, país donde el problema tiene una larga historia. En su etapa más reciente, las luchas de los trabajadores desempleados se inició a finales del siglo pasado, teniendo su clímax con el estallido de la crisis nacional en diciembre de 2001. Una reflexión sobre la génesis de este movimiento la aporta Julio Gambina (2007, p.15):

El fenómeno del desempleo consolidó, en la década del '90, una nueva situación en la respuesta de los trabajadores, y generó, desde 1997, un corrimiento de la protesta de los trabajadores. Por un lado, puede destacarse el surgimiento, en los '90, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que privilegió la adhesión de los trabajadores con independencia de su inserción sindical y su carácter de activo o pasivo, regular o irregular. A diferencia de la CGT, incluyó en su seno la problemática del desempleo, y especialmente a los desempleados. Se terminaba un ciclo histórico de privilegio a una Central única de trabajadores, aunque es cierto que en varias ocasiones ésta se encontraba dividida. Pero debemos resaltar la voluntad, en este período, de conformar una Central alternativa a la burocrática expresada en la CGT. En la CTA confluían distintas vertientes de un peronismo disidente y corrientes diversas de la izquierda, todos en la búsqueda de una nueva representación sindical y política de los trabajadores.

El desempleado – el hombre sin trabajo, urbano y rural – en la Argentina del neoliberalismo a ultranza, gracias a la dedicación de Carlos Menem, pasó a ocupar un papel muy importante dentro del estallido social que desbordó al país a partir de diciembre de 2001. Bajo el calificativo de “piquetero”, se organizaron acciones grupales dedicadas al “corte de rutas”, como las iniciadas por los trabajadores despedidos por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Como es bien conocido, en esa coyuntura se produjo una alianza tácita, circunstancial, de estos sectores con la “clase media” argentina, la que, sumada a otras capas de la población,

de sus antepasados; y el derecho de preservar y proteger su cosmovisión del mundo, sus lenguas y sus costumbres y tradiciones. En esencia, los pueblos indígenas pasaron de la semi-esclavitud y servidumbre que les impuso el colonialismo español a similares condiciones bajo el neocolonialismo de Estados Unidos y de las oligarquías locales.

hizo explosivo un panorama ya bastante tenso, radicalizando la crisis, generando la salida de dos presidentes y obligando a la rápida organización de un nuevo proceso electoral. Resultado de los acontecimientos fue el triunfo de Néstor Kirchner, una figura secundaria del peronismo, pero que ganó consenso mayoritario para derrotar a Carlos Menem.

En esta crítica coyuntura, el territorio, como ámbito local, alcanzó una dimensión particular. Esto se debió a que se interpretó el territorio como un espacio en el cual podían desarrollarse conflictos sociales con capacidad para imponer negociaciones y alcanzar soluciones. También fue expresión del debilitamiento – y descrédito – de la vía sindical como canal para impulsar las demandas de los desempleados.

Se ha hablado mucho acerca de la diversidad del movimiento piquetero porque, tras el triunfo de Kirchner, este logró, consecuente con la visión corporativa tradicional del peronismo, captar a un núcleo de estas fuerzas, hoy organizadas en torno a la plataforma de los Barrios de Pie y el Movimiento Patria Libre. Pero además de estas fuerzas y de los grupos siempre dispuestos a generar disturbios (lamentablemente muy útiles para los grupos de poder y los medios masivos, críticos de la izquierda) hay un núcleo fuerte que quedó organizado, con y sin vínculos con los partidos de izquierda, que ha organizado importantes asambleas barriales, asociaciones de desempleados, recuperado fábricas, empresas y hoteles abandonados por sus dueños, y trató de defender una nueva perspectiva de lucha pacífica, organizada desde lo local. Aquí resulta clave la redefinición del concepto de territorio, como nos dice Daniel Campione (2004, p.16):

El territorio, lo 'local' [...] se ha erigido en el espacio de cuestionamiento concreto y directo al modelo de dominación política y social. Se forma un microcosmo reproductivo social que plantea una articulación territorial distinta a la implantada por el capitalismo neoliberal, destructiva de ámbitos y vínculos, promotora de la individualidad aislada y aislante. Ocupar el territorio es un imperativo estratégico, ocuparlo con cuerpos vinculados solidariamente [...] la crítica al desempleo no es el eje [...] sino la crítica al trabajo capitalista y a la sociedad que lo sostiene. Desde lo local se cuestiona lo global, no se lucha contra la 'exclusión', para volver a 'incluirse', sino contra la sociedad alienante y explotadora, en su conjunto.

Como parte de este recuento, inevitablemente segmentado dada la amplitud de los movimientos sociales en acción, no puede dejar de mencionarse a otro actor social, cuyo eje articulador es la lucha por la tierra, o sea, por el derecho a poseer un pedazo de tierra para cultivarla y sobrevivir. Este es un tema, que junto a la pobreza y el desempleo, ha acompañado siempre a la mayoría de la población latinoamericana, indígena y mestiza. Por eso la necesidad de destacar al Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, que ha desplegado una amplia y bien definida estrategia mediática y de participación en los diferentes Foros Sociales internacionales, para dar a conocer su lucha y desmitificar todas las mentiras que se hacen recaer sobre ellos.

¿Cómo tipificarlo? ¿Campesino desposeído? ¿Trabajador agrícola desempleado? ¿O simplemente, desempleado? Tal vez sea una mezcla de lo uno y lo otro, pues resume al hombre con hambre, sin medios de producción, que encuentra su única opción en el trabajo de la tierra, problema histórico, en toda la América Latina, aunque tiene una especial connotación en Brasil. Según João Pedro Stedile (2001), fundador del MST, la ocupación de tierras en Brasil es un problema histórico y de tanta trascendencia que la legislación lo incorporó al concepto mismo de propiedad.

Y no sería acertado dejar de mencionar a una figura, devenida coyunturalmente en actor social, como ocurrió en Argentina con la pequeña y mediana burguesía, que se hizo visible en Quito, Ecuador, durante los meses de abril y mayo de 2005. En esa coyuntura el presidente Lucio Gutiérrez, quien ya hacía mucho que sobraba en el gobierno, fue obligado a huir por un estallido social protagonizado por sectores estudiantiles y de la pequeña y mediana burguesía, bautizados por el propio Presidente como Los Forajidos (PONCE, 2005). Como evidencia del fraccionamiento político que sufre la sociedad ecuatoriana, llama la atención que los partidos de izquierda ecuatorianos y los movimientos indígenas no participaron en los acontecimientos descritos.

Por supuesto, que se han colocado actores muy diversos, con alcances y proyecciones también diferentes. Mientras que dentro del movimiento indígena sí hay quienes luchan y han conquistado el poder político, otros, como los piqueteros, ven sus espacios de poder en la perspectiva de lo local, ya sea para apoyar al gobierno o demandar a este sus plataformas reivindicativas. Salvando las lógicas diferencias, piqueteros y Sin Tierras ven en sus espacios vitales definidos su razón de ser. El barrio, la comunidad, la tierra,

enfrentando al gobierno y sus mecanismos o al impune *fazendeiro* con sus ejércitos particulares. La clave está en el desarrollo de una estrategia de lucha política, que es la que los ha consolidado como actores indiscutidos en nuestras sociedades.

Resta un comentario sobre Los Forajidos, un tema complejo debido a que fueron constituidos, fundamentalmente, por un segmento poblacional como el estudiantado de larga tradición de lucha en nuestro continente; pero que no dejó de ser un movimiento clasista, de la pequeña y la mediana burguesía, marginado del resto de la sociedad. Algo similar ocurrió con la «clase media» argentina y su reacción frente al llamado Corralito de los bancos del país; y no se niega el papel que desempeñaron, fueron aliados tácticos, pero sólo eso.

Pero hay un gran problema expresado por todos ellos: las serias contradicciones con los partidos de izquierda de sus respectivos países. De entrada esto provoca una división entre las fuerzas que pueden llevar adelante los cambios sociopolíticos que demandan nuestros países. Por eso hay que entenderlos como actores con un potencial desempeño importante para la construcción de cualquier alternativa antineoliberal y incluso anticapitalista, sin olvidar que necesitan articularse socialmente, ganar en conciencia política y vincularse con aquellas fuerzas de la izquierda que ya tienen una institucionalidad política para gestar el cambio social.

¿Por qué no se les reconoce una mayor responsabilidad en los importantes cambios que han venido ocurriendo en nuestro continente? Los resultados de sus acciones lo demuestran. En primer lugar, la experiencia por la que pasaron las organizaciones indígenas ecuatorianas agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y su brazo político Pachakutik, debe ser cuidadosamente analizada. Si bien ya nadie duda de cómo Lucio Gutiérrez utilizó el prestigio y el empuje social de los indígenas para llegar al poder y después provocar divisiones en su interior, desgastándolos políticamente, no quiere esto decir que no puedan ser viables las alianzas de los movimientos indígenas con sectores políticos con intereses y aspiraciones convergentes; todo lo contrario, este es un factor imprescindible, si se pretende un cambio político que conduzca a un nuevo proyecto de nación. Esta lectura es muy importante, no solamente para el movimiento indígena ecuatoriano, sino para los movimientos indígenas de otros países, como Bolivia, Perú

e incluso México. La verdadera reivindicación de los derechos de pueblos originarios pasa por la necesaria articulación con otros sectores sociales igualmente marginados y socialmente explotados por el gran capital. Somos una multiplicidad de etnias, razas y sus descendencias, gracias a la herencia de las épocas de la conquista y la colonización europea, y sin considerar esa diversidad – sin discriminaciones y respetando los derechos de todos – no se puede pensar en la recomposición de nuestras naciones. Toda opción política que desconozca esa realidad tiene muy escasas probabilidades de éxito.

El caso de los piqueteros argentinos también nos muestra importantes aspectos para el análisis. Hablamos de un movimiento muy heterogéneo que, aunque tenga sectores con un horizonte político más claro, ha sido muy golpeado por el sistema dominante, por lo cual su rechazo al “gobierno” y, en particular, a su aparato policial son factores difíciles de superar. Esto lo ha hecho vulnerable a las manipulaciones políticas y ha propiciado un consciente o inconsciente conflicto por el poder; como, por ejemplo, ocurrió con el actual presidente Kirchner y su antecesor, Eduardo Duhalde.

También hay que tomar la experiencia de Los Forajidos de Ecuador, quienes, tras desempeñar un papel decisivo para la salida de Gutiérrez, no lograron la misma efectividad algunos meses después con las manifestaciones populares convocadas para protestar contra el evidente compromiso del presidente, Alfredo Palacio, con la oligarquía tradicional vinculada al capital transnacional, en acciones como la concertación de un TLC con los Estados Unidos. Porque ellos no son la sociedad ecuatoriana; viven dentro de ella, como parte de un universo de fuerzas mucho mayor. Sin una concertación de sectores sociales, lo cual no resulta nada descabellado, considerando la evidencia de una agenda con temas demandados por la mayoría de la población, no se puede aspirar a un verdadero cambio de la situación socio-económica nacional.

Cerramos esta parte del análisis con una interesante reflexión de Carlos Vila, quien toma como referente lo ocurrido en Argentina, pero que puede ayudar a tipificar a esos actores y sus limitaciones:

[...] es posible emparentar los sucesos de diciembre de 2001 en Argentina con acontecimientos de protesta masiva escenificados recientemente en otros países de América del Sur. Tanto por el papel

que en todos ellos desempeñaron esquemas de política y ajuste macroeconómico inspirados de una u otra manera en el llamado Consenso de Washington, y en los objetivos e intereses de las elites del poder económico y financiero, como por la virulencia del desborde popular ante la deslegitimación de los sistemas políticos respectivos. Y también por la capacidad del viejo sistema político de procesar la crisis y reorientar y neutralizar la protesta masiva cuando el cuestionamiento social no alcanza una expresión política propia y no muestra capacidad de avanzar desde el rechazo – momento inicial imprescindible de cualquier búsqueda de una alternativa – hasta la formulación de propuestas viables (VILAS, 2005, p.229).

De la resistencia a la conquista del poder político

En un sugerente artículo dedicado a reflexionar sobre los cambios socio-políticos que han venido ocurriendo en América Latina, Beatriz Rajland rememora a Carlos Marx – en su conocido ensayo *Miseria de la Filosofía* –, cuando plantea que no se puede absolutizar el peso de los movimientos sociales, como únicos factores de cambios; y, sobre todo, rescata la interacción existente entre lo social y lo político. Para la autora:

[...] resulta básica la consideración de que todo lo que refiere a los seres humanos es social, dado que somos un conjunto de relaciones sociales. Cuando en el análisis se separa lo social y lo político, sólo es por razones de construcción de movimientos, porque lo político está, en líneas generales, relacionado con la esfera del poder estatal, y lo llamado ‘social’ con reivindicaciones más específicas. Sin embargo, lo político sólo se organiza desde lo social en el sentido de pertenencia de los sujetos al campo de las relaciones sociales, y lo social, en cuanto a sociedad, deviene en político por la índole de horizonte de poder que se va formulando. Si todo el movimiento llamado social permaneciera exclusivamente en esas reivindicaciones y no se organizara y proyectara hacia el poder político, hacia su construcción alternativa, los alcances de su lucha quedarían limitados, por fuera del poder político (RAJLAND, 2007, p.41).

Indudablemente que estamos frente a un tema que demanda un análisis exhaustivo, dado el nivel de rupturas producido entre la generalidad de los movimientos sociales y los partidos de

izquierdas existentes en América Latina en la última década del siglo XX. Sin embargo, ese indisoluble vínculo quedó garantizado cuando algunos de esos partidos políticos lograron, bajo diferentes fórmulas electorales, levantar programas de gobierno que recogían muchas de las demandas sociales planteadas. Por otra parte, en la medida en que esas nuevas coaliciones de fuerzas triunfaron electoralmente, ese apoyo social se reafirmó, ya sea por la credibilidad alcanzada o para negarle opciones a los candidatos de la derecha. Los problemas sobrevendrían nuevamente, con el incumplimiento de las promesas de campaña y el evidente comprometimiento de los nuevos gobiernos con los intereses del poder tradicional que los apoyó.

Pero este fue sólo uno de los escenarios socio-políticos aparecidos; otras fuerzas, desde las emergentes e incluso no organizadas desde un partido político, levantaron alternativas que sí fueron reconocidas por la generalidad de los movimientos sociales. Aunque la clave del problema se centró en la capacidad y la disposición de muchos de estos movimientos de acompañar a esas nuevas fuerzas políticas en la construcción de un nuevo poder alternativo al existente. Porque debido a razones históricas, políticas e incluso psicológicas, predomina en la región, desde hace mucho tiempo, una cultura de la resistencia y de lo que se trata, ahora, es de alimentar la cultura del pueblo en el gobierno, del pueblo en el poder.

A partir de 2002, con el ascenso al poder en Brasil de Luis Inacio Lula da Silva – pasando a acompañar al hasta entonces solitario Hugo Chávez en Venezuela –, fueron triunfando en las urnas otros líderes políticos – Néstor Kirchner, en Argentina, Tabaré Vázquez, en Uruguay –, expresión de la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo regional. Al inicio de sus gobiernos – colocando a Chávez aparte – estos nuevos líderes fueron ubicados dentro de la izquierda tradicional; pero en la medida en que fueron desarrollando sus programas de gobierno, se hizo evidente los fuertes matices que los distanciaron de la idea original, fruto de muchos factores, como los propios condicionamientos impuestos por las alianzas políticas. Pero, sería ingenuo rechazar la idea de un pensamiento político conscientemente más moderado, que los acerca – si no los incluye – dentro del amplio espectro de la socialdemocracia latinoamericana.

Luis Inacio Lula da Silva es el primer dirigente sindical que asume la Presidencia de Brasil. Líder del Partido de los

Trabajadores (PT), desde su fundación en la década del 1980, se postuló para la Presidencia de Brasil en tres ocasiones antes de obtener el triunfo electoral en las elecciones de octubre de 2001, iniciando su primer mandato en enero del siguiente año. Siendo el gran aglutinador de la izquierda “moderna” brasileña, a Lula se le reconoce, entre otros méritos, el de haber auspiciado la idea de crear el Foro de Sao Paulo, nombre con que se identificó esa instancia que facilitó los encuentros e intercambios políticos de la izquierda latinoamericana después de la caída del “Muro de Berlín” (REGALADO ALVAREZ, 2006b). Finalmente, es importante señalar, que el PT de Lula logró su victoria electoral en el 2001, después de haber realizado negociaciones y alianzas con otros sectores políticos, de dentro y fuera de la izquierda brasileña, llevando incluso como Vice-Presidente a un magnate de la industria textil, José Alencar. Este factor implicó, para Lula y su equipo de colaboradores más cercanos, la necesidad de armonizar las expectativas de sus seguidores “petistas”, con las imprescindibles buenas relaciones que debía articular con la elite de poder tradicional. Si a esto agregamos el escándalo por corrupción dentro del PT, con enormes implicaciones políticas que llevaron a especular sobre un posible “impeachment” del Presidente, y los perfiles con que se delinearon las relaciones de Brasil con Estados Unidos, tenemos tres de las más importantes características que han definido al gobierno de Lula.

Néstor Kirchner, Gobernador de la provincia de Santa Cruz, al momento de postularse a la Presidencia de su país en las elecciones de 2002-2003, es considerado un exponente de la izquierda peronista de los años setenta del pasado siglo. Siendo una figura política secundaria, emergió triunfador en las urnas, en el “ballotage”, beneficiado por el lema de “todos contra Menen”; debido a que en la primera vuelta el ex Presidente y artífice del neoliberalismo, con sus desastrosas consecuencias para el país, había alcanzado la mayor cantidad de votos, 24,4% por 22,2% de Kirchner, su más cercano rival. A diferencia de Lula, Kirchner tuvo que asumir un país sumido en el caos generalizado, resultando un balón de oxígeno para un sistema político que no afrontó una crisis definitiva gracias a las características de los estallidos sociales ocurridos, que no llegaron a alcanzar esa dimensión anti-sistémica, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela.

Tabaré Vázquez, un médico de exitoso desempeño político al frente de la Intendencia de Montevideo, también tuvo que

enfrentar, como Lula, varias derrotas electorales, hasta la conformación de una triunfante coalición de muy diversas organizaciones. Al Frente Amplio, fundado por el General Líber Seregni, en 1971, se sumaron el Encuentro Progresista y el Nuevo Espacio; algunas organizaciones del mundo sindical (PIT/CNT), la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU); y diversas organizaciones empresariales, de jubilados, sociales y barriales. Tabaré fue el candidato del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, alcanzando la victoria en la primera vuelta y logrando la mayoría absoluta en el Parlamento.

Sin embargo, el caso de Uruguay no deja de resultar ambiguo desde no pocos puntos de vista. Esta calificación se ve alimentada al establecer correlaciones entre discurso y realidad en temas tan sensibles como las relaciones con Cuba; la profundización o no de los vínculos comerciales con Estados Unidos; o el declarar que la vía diplomática sigue siendo la más adecuada para solucionar el diferendo con Argentina, por las plantas productoras de celulosa, en un espacio de la frontera común. Tabaré ha declarado que su gobierno es popular, democrático, anti-oligárquico y anti-imperialista; y también, en vísperas de la visita del Presidente Bush, el marzo de 2007, declaró que con Estados Unidos “existen diferencias, no rivalidades”. Lo cierto es que para avanzar hacia una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en Uruguay se puede revalidar una aseveración que Raúl Zibechi (2005, p.6) formuló hace ya algún tiempo: “[...] la sensación térmica es que las fuertes diferencias internas se van resolviendo a favor de los sectores más pragmáticos, alineados con el continuismo económico”.

Por su parte, Chávez es un militar que asumió la decisión de derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1992, por la vía de las armas y seis años después fue electo Presidente en las urnas por una mayoría de la población, que ha aumentado en organización, apoyándolo durante 11 diferentes procesos electorales y referendos; además del impresionante despliegue de apoyo popular que recibió en la coyuntura de intento de golpe de estado para derrocarlo, de abril de 2002. En estos años de gobierno, ha demostrado una notable capacidad de comunicación con sus seguidores, en particular con la gran masa de pobres y marginales que dejó la larga historia de democracia liberal, hasta su ascenso al poder. El eje central de su pensamiento político es el ideario del libertador Simón Bolívar, lo que le ha

permitido, muy a pesar de sus enemigos y detractores políticos, en armonía con su formación de militar, criollo y nacionalista, vertebrar un pensamiento anti-imperialista, latinoamericanista e integracionista; asumiendo en la lucha contra el ALCA y por la construcción, ampliación y consolidación del ALBA, un espacio protagónico en el nivel regional.

A éstas nuevas fuerzas políticas emergentes, se sumaron los gobiernos de Evo Morales, en Bolivia (enero de 2006), Daniel Ortega, en Nicaragua (octubre de 2006), y Rafael Correa, en Ecuador (noviembre de 2006); marcando una tendencia a la regionalización de los gobiernos de izquierdas. El hecho de que resultaron electos por el voto popular, en las urnas, todas ellas expresión de cambios desde su diversidad, resultó muy significativo. Ya no sólo fue el ascenso al poder, por vías democráticas, de nuevas experiencias políticas desde el más amplio espectro de las izquierdas; pero también que representaban un nuevo “estado de cosas” en el panorama político de sus respectivos países, y se trataba de países importantes dentro de la geografía política regional. Como ya se anotó, fueron el resultado, entre otros factores, de la “crisis de representatividad” de los partidos políticos tradicionales, en momentos en que también muchos partidos de la izquierda habían perdido la comunicación con sus bases sociales; que pasaron a canalizar sus demandas a través de las nuevas fuerzas políticas o por la vía de diversos movimientos populares, nuevos o ya conocidos. Pero los problemas socio-económicos fueron, indudablemente, un factor de mucho peso que generalizó la emergencia de este nuevo liderazgo político.

Tal vez los indicadores económicos, sobre todo macroeconómicos, no venían a fundamentar el porqué del triunfo de Lula, debido a que el gobierno precedente, de Fernando Henrique Cardoso, no dejó a la economía brasileña en su peor momento, como sí ocurrió en los restantes países mencionados. Pero los indicadores sociales sí fueron decisivos para el ascenso del (PT) al poder en enero de 2002. Theotonio dos Santos (2004) nos ilustra esta realidad cuando recuerda que en el año 2001, el crecimiento del Producto Interno Bruto brasileño fue de 1.5%, en un país en el cual la población crece al 1.3%, con un mercado de trabajo nacional que absorbe anualmente solo el 2.3% de la población laboralmente joven. Siguiendo este razonamiento, cada año se genera una increíble masa de desempleados, fuente inevitable de la violencia social, un tema de máxima urgencia en Brasil.

La situación nacional de Uruguay era realmente dramática. Un ensayo elaborado por el propio presidente Tabaré Vázquez revela cifras alarmantes. Casi un tercio de la población, aproximadamente un millón de uruguayos vivía al momento de las elecciones en condiciones de pobreza; de ellos 100.000 se encontraban en la indigencia. Llama la atención la cifra de jóvenes menores de 18 años en condiciones de pobreza, el 60% de la población, lo que los convierte en un potencial factor de violencia social. Casi un millón de hombres y mujeres están desempleados o subempleados; casi la mitad de la población económicamente activa – unas 750.000 personas no tienen cobertura de seguridad social –; más de 300.000 uruguayos no tienen cobertura de salud pública, mucho menos privada. Apenas el 20% de los alumnos que ingresan a la enseñanza secundaria logran graduarse. Más de 100.000 uruguayos han emigrado del país (VÁZQUEZ, 2005).

En el caso de Argentina, Carlos Vilas (2005, p.241-242) facilita un elocuente diagnóstico de la situación nacional, al momento de estallar la crisis:

En octubre de 2001, el 10% más rico de los hogares del área metropolitana (Gran Buenos Aires) concentraba la misma porción del ingreso total que el 60% más pobre, y su nivel de ingreso promedio era casi 34 veces más alto que el del 10% más pobre de los hogares: casi 80% más que una década atrás y 25% más que la coyuntura hiperinflacionaria de 1989 [...] El aumento de la desigualdad aceleró el crecimiento del empobrecimiento de los hogares (tanto en la proporción de población en condiciones de pobreza como en la magnitud de ésta), efecto en el que tuvo peso importante el crecimiento del desempleo: a finales de 2001, la tasa de subutilización de la fuerza de trabajo (desempleo abierto más subempleo) rondaba 35% de la Población Económicamente Activa urbana. Durante ese año, más de 830.000 personas ingresaron en el mundo de la pobreza. Hacia finales de 2001, la brecha entre el ingreso total promedio de los hogares del Gran Buenos Aires y el precio de la canasta básica total era de casi 46%, y considerablemente mayor en algunas provincias.

En cuanto a Venezuela, la información existente sobre la situación económico-social del país en los años precedentes a la Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez es también ilustrativa a la hora de explicar los cambios que se avecinaban.

Durante el gobierno de Rafael Caldera, a mediados de los años noventa, la economía colapsó y el índice de pobreza alcanzó el 66.7% de la población; y de esa elevada cifra, el 65% vivían en la pobreza extrema. Según un informe del Congreso publicado a finales de 1994, el 79% de las familias eran pobres y una de cada tres vivía en la pobreza extrema. El 67% de los venezolanos ganaban en 1997 menos de dos dólares diarios (BUXTON, 2003).

Indudablemente, los nuevos actores, sociales y políticos tuvieron en el ascenso de los nuevos gobiernos un punto de inflexión, que determinó que las relaciones entre algunos de ellos fueran más estrechas o más distantes. Tal situación delimitó a aquellos movimientos que se consolidaran como actores, desde la resistencia y no desde el gobierno; por lo que aparecieron inevitablemente escenarios de conflicto entre estos y los nuevos líderes políticos. Este es un tema sumamente complejo. Por ejemplo, el movimiento indígena, aún hoy con Rafael Correa en el gobierno de Ecuador, no se ha lanzado a un apoyo abierto y masivo al nuevo mandatario. En el caso de Bolivia la situación es mucho más compleja, porque la oposición a Evo Morales ha atraído a sectores indígenas y el gobierno está tratando de manejar la situación – con el tema de la nueva Asamblea Constituyente en el centro del debate –, que se torna cada vez más complicada. Pero si complicado es manejar la dicotomía oposición-gobierno, no menos complicado sería la otra dicotomía planteada entre gobierno y poder; porque no se está descubriendo nada al afirmar que los nuevos gobiernos triunfaron en las urnas, pero eso no significó asumir el poder real en sus respectivos países. Avancemos en algunas consideraciones desde dos dimensiones muy bien definidas.

La dimensión gobierno es muy interesante, entendiéndola en la relación transaccional de variable oposición política que pasa a ser variable gobierno. Para cumplir con los objetivos del análisis que iniciamos, centremos la atención en las definiciones asumidas por los nuevos gobiernos frente a las elites de poder tradicional de sus respectivos países, en sus diferentes tipificaciones. Así podríamos mencionar un primer segmento formado por coaliciones políticas que triunfan electoralmente ante las fuerzas políticas tradicionales, pero que no se proponen cambiar el *status quo* existente, bien por no contemplarlo en su proyecto o porque sabían que no podían lograrlo. Siendo fuerzas políticas que no han alcanzado gobiernos con anterioridad, optaron por negociar y

trabajar por maximizar los espacios de concertación con esa elite de poder tradicional; lo cual se aprecia con sus características en los casos de Brasil (el más acentuado) y Uruguay.

Un segundo segmento sería trazado a partir de aquellos nuevos gobiernos cuyos candidatos triunfantes no son ajenos a la elite de poder, pero no eran los inicialmente identificados para ello. Pertenecientes a partidos políticos “incluidos”, emergieron coyunturalmente debido a un conjunto de factores domésticos – tales son los casos de Michelle Bachelet, en Chile, Néstor Kirchner, en Argentina, Oscar Arias, en Costa Rica, y Alan García, en Perú. A diferencia del segundo segmento mencionado, el tercero – con Felipe Calderón, en México, y Álvaro Uribe, en Colombia – se articula a partir de al menos dos razones esenciales (y no sólo para la elite de poder, sino también para los Estados Unidos): la primera es que son gobiernos de países con una muy clara importancia estratégica para Washington; la segunda es que son miembros “aprobados” y apoyados por esa misma elite de poder.

Por supuesto que lo apretado de ésta síntesis elude – además de remitir a la búsqueda de informaciones adicionales – toda una serie de acontecimientos conocidos, como el apoyo coyuntural y condicionado de la izquierda chilena a Bachelet. Otro fue el apoyo de la derecha peruana a Alan García, ante el temor de un triunfo electoral de Ollanta Humala, apoyado públicamente por Chávez. También debe mencionarse la elección de Oscar Arias, flamante “Premio Nobel de la Paz”, por su dudosa ejecutoria pacifista durante la crisis centroamericana de los años 1980, que fue electo Presidente para salvar la credibilidad en el Ejecutivo costarricense, tras los sucesivos encarcelamientos de Presidentes. Finalmente, debe mencionarse el fraude electoral que benefició a Calderón, a expensas del candidato de las izquierdas mexicanas, Andrés Manuel López Obrador.

El cuarto, y último, segmento define sus diferencias y su gran complejidad en relación con los anteriores, al referirse a gobiernos impulsores de transformaciones que conllevan a rupturas de la institucionalidad impuesta por ese poder tradicional; sin desconocer las características particulares de cada uno de ellos. De entrada, es muy importante delimitar que los unen determinados criterios políticos, ya que no parten de una receta única. En los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, sus respectivos presidentes no son líderes ni miembros de

partidos políticos tradicionales. Incluso su arribo a la política está más vinculado, en sentido general, con la coyuntura política de sus países y no con una carrera política preparada. Estamos hablando de un ex militar, de un líder indígena y de un profesor universitario que lideran movimientos políticos diversos que capitalizan las demandas de la población; siendo sus triunfos – tal vez con la excepción de Chávez – inesperados. Pero está el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, líder de la Revolución Sandinista de 1979; derrotado electoralmente en 1992, que se diferencia por la concertación de fuerzas políticas que lo llevaron nuevamente a alcanzar el gobierno, entre las que se cuentan fuerzas de la derecha; lo cual condiciona su programa gubernamental, por la polarización de fuerzas dentro de la izquierda nicaragüense y particularmente dentro de todo el espectro político sandinista; por la extrema vulnerabilidad económica del país; y por la estrecha vigilancia que mantiene Estados Unidos sobre el país, para impedir una repetición de la historia anterior, nos llevan a abrir un compás de espera, a sabiendas de los presupuestos políticos que mueven a Ortega, viejo aliado de Cuba y Venezuela y entusiasta defensor del ALBA.

Otra dicotomía que emerge de éstas reflexiones es la establecida entre el ALCA-ALBA. El ALCA recibió una firme oposición de Venezuela y de los países del MERCOSUR, teniendo que ser reacomodada la propuesta original por su gestor – Estados Unidos –, recurriendo a su viejo y exitoso recurso del bilateralismo, ésta vez bajo la forma de los TLCs. Por otra parte, los países miembros o cercanos al ALBA, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, encuentran aliados tácticos en Brasil, Argentina y Uruguay, porque no pueden desentenderse de los importantes proyectos que se llevan adelante desde esa nueva perspectiva. El pragmatismo económico se ha hecho presente, debido a los grandes intereses nacionales en juego. La propia oligarquía colombiana ejemplifica ésta percepción, más allá del diferendo político entre Chávez y Uribe. De ahí que la real dicotomía planteada a nuestros países sea neo-liberalismo o anti-neoliberalismo, lo que nos lleva a abordar la segunda dimensión anunciada.

Ya se mencionó que no se debe identificar automáticamente gobierno y poder real. Alcanzar el gobierno no es alcanzar el poder; y ya lo vimos en las reflexiones anteriores. A diferencia de los restantes segmentos tipificados, el cuarto de ellos tuvo como una importante característica común – para los casos

de Venezuela, Bolivia y Ecuador – la convocatoria a nuevas Asambleas Constituyentes. Porque había que comenzar por la depuración de todas aquellas fuerzas políticas que podían obstaculizar la nueva legislación que debía implementarse y así iniciar el proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales, correspondientes con sus respectivos programas electorales. Una nueva Asamblea Constituyente demanda a su vez una nueva carta magna; pero ese ya es un proyecto que requiere una consolidación del proceso político encabezado por el nuevo gobierno, dadas las implicaciones que conlleva para toda la sociedad. Quiere esto decir que el proyecto en sí de elaborar una nueva constitución implica ya un paso decisivo para la construcción del nuevo poder. De ahí la férrea oposición que enfrentó Rafael Correa y que aún enfrenta Evo Morales.

Otra característica generalizada, como factor intrínseco al proyecto político alternativo, ha sido la revalorización del papel del estado, como mecanismo principal para ejercer el nuevo poder. El neoliberalismo se encargó conscientemente de minimizar y dismantelar lo más posible el papel del estado, para abrir totalmente al exterior las economías y los mercados, quedando el poder real en manos de las grandes empresas transnacionales; que mantuvieron funciones esenciales del estado para proteger sus intereses. Por tanto, ese estado revalorizado por estos nuevos gobiernos, que rescata presupuestos históricos como la defensa de la soberanía e independencia nacional y los recursos naturales de la nación, entra, de inmediato, en confrontación con el orden neoliberal establecido. Pero, por supuesto que no resulta nada fácil sustituir sin confrontación – que es lo que está ocurriendo en la práctica – un “estado neoliberal” por otro tipo de estado, con otras cuotas de poder real.

Aquí es muy importante la claridad de las metas políticas definidas; el consenso social para alcanzarlas y la madurez que requiere ese proceso de transformaciones que no se puede alcanzar de la noche a la mañana; y mucho menos menospreciar sus tiempos. No se olvide que en todos los casos evaluados, sobre todo Venezuela y Bolivia, se está en presencia de un escenario de lucha de clases. La oposición es la “vieja” clase que se está desplazando del poder; pero que lucha por impedirlo – no desde la distancia de Miami, como ocurrió para el caso cubano. A lo que debe sumarse las inevitables escisiones de partidarios del gobierno, que pueden haber participado honestamente del

proceso de cambios, pero con criterios mucho menos radicales. Todo ello sin desconocer las presiones y manipulaciones externas para frenar y revertir los procesos políticos en curso.

Un tercer factor a mencionar es la relación decisiva que debe existir entre ese nuevo gobierno y sus bases sociales. Más allá del apoyo en las encuestas, hay acontecimientos que marcan la profundidad y el arraigo popular de un determinado proceso político. El pueblo fue decisivo para frustrar el intento de golpe de estado en abril del 2002 en Venezuela. Las grandes masas indígenas continúan demostrando su apoyo mayoritario a Evo Morales en Bolivia, siendo un importante “muro de contención” contra la oligarquía nativa. Para Correa y Ortega lograr articular y consolidar una base social definida, que los acompañe en la aplicación de sus respectivos programas de gobierno, se convierte en un elemento crucial para su gestión ejecutiva. Ahora, es crucial preparar a esas masas populares para las transformaciones políticas y las nuevas metas proyectadas.

Como características generales, muy importantes de estos gobiernos, se pueden mencionar la profundización de la democracia participativa; la nacionalización de recursos estratégicos básicos como el gas y el petróleo, siempre bajo negociación con sus dueños transnacionales; la expropiación gradual y compensada de determinados sectores productivos y tierras no explotadas por sus dueños, para entregarlas a productores y campesinos; el rescate de las articulaciones entre las políticas internas y externas del gobierno, para restablecer la institucionalidad del sistema y garantizar estrategias internacionales viables; y la aceleración de importantes programas de desarrollo humano en áreas de salud, educación, cultura y deportes.

A diferencia de este camino anti-neoliberal, seguido y proclamado por contados países, la tónica para muchos nuevos gobiernos en la región ha sido el trabajar en la construcción de escenarios “post” neo-liberales, sin desmontar los efectos reales del neo-liberalismo en sus sociedades. Eso ha implicado, en primer lugar, que no se han producido rupturas con el orden institucional precedente. En segundo lugar, hay una recuperación del papel del estado, pero para rescatar el conjunto de las instituciones y así poder elaborar estrategias para manejar la crisis socio-económica que heredan es necesario abrir un camino para la recuperación económica nacional, con la adopción, según el caso, de políticas sociales anti-crisis y con el establecimiento de nuevas relaciones

internacionales. Eso ha implicado el lanzamiento de programas sociales compensatorios al estilo de “Fome zero” en Brasil, o las compensaciones a segmentos de pensionados y desempleados en Argentina. Otra característica ha sido el empleo y manejo de temas políticos de probado consenso nacional, como la defensa de los derechos humanos y los procesos para llevar a juicio a los genocidas de la época de las dictaduras militares, como factores de credibilidad del gobierno. En cuanto al ámbito internacional, dos aspectos claves, no romper con los organismos financieros, aunque defendiendo posiciones más razonables para manejar la crisis económica y cumplir con el pago de los adeudos, bien como el paso hacia una relación más equilibrada con Estados Unidos. En este sentido, como ocurrió en el caso argentino, sus relaciones económicas con Venezuela han sido un factor estratégico; ejemplificando el equilibrio entre pragmatismo e ideologismo.

De todas formas, no hay duda alguna en cuanto al precedente que se ha marcado con estos gobiernos democráticamente electos, en una región cuya historia recoge rápidos operativos encubiertos o directos golpes de Estado para sacarlos del poder. Y se han incluido en la investigación solamente aquellos gobiernos que ya acumulan años de mandato, incluso Lula ya reelecto para un segundo período presidencial. Pero no se puede desconocer, por lo que repriman como alternativas políticas, los gobiernos de Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa; marcando una tendencia a la regionalización de los gobiernos de izquierdas. Tal vez por no dejar de señalarlo, se debe considerar también el hecho de que, además de verse favorecidos por la pérdida de credibilidad de sus tradicionales oponentes políticos, contar con el mayoritario apoyo popular y, sobre todo, resultar electos democráticamente, se beneficiaron de un contexto internacional, en el cual América Latina no ha sido una región priorizada para la política exterior de la administración G. W. Bush; y los temas de la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos son un recurso manejado por los sectores demócratas de la elite de poder en Estados Unidos.

América Latina y sus funciones dentro de la política exterior de Estados Unidos

Una de las interrogantes que más pudo haber acompañado los diferentes procesos políticos ocurridos en la región está

relacionada con las posibles reacciones de Estados Unidos frente a los cambios ocurridos. Lo cierto es que, más allá de los niveles de aceptación o inconformidad que hayan generado estos cambios en Washington, no podían evitarlos y mucho menos acudir al empleo de mecanismos e instrumentos de dominación tradicionales porque las condiciones históricas existentes llevarían a una confrontación de incalculables consecuencias. Pero hay otra lectura, que para algunos es utilizada como argumento principal: América Latina no es una prioridad para la actual política exterior de Estados Unidos.

Son muchas las aproximaciones para formularlo, pero la esencia es cómo se vende la imagen de una América Latina que sólo importa a Estados Unidos, en tanto haga peligrar, realmente, la histórica relación de dominación-dependencia impuesta desde el siglo pasado. En un artículo dedicado al tema, Atilio Borón (2006, p.1) hace alusión a la conocida tesis de la

[...] irrelevancia de América Latina, alentada tradicionalmente por Washington, tal como antes lo hiciera la Inglaterra victoriana respecto de India. En ambos casos se entiende muy fácilmente la lógica que preside ese razonamiento: “convencer al otro de su insignificancia y de su inferioridad otorga al dominador una ventaja prácticamente decisiva en cualquier controversia” .

Más adelante continúa el autor:

[...] lo grave no es que tesis como ésta la expresen voceros de Washington; lo realmente lastimoso y deplorable es que la misma sea tenida como válida por supuestos expertos en asuntos internacionales y por gobernantes resignados y claudicantes de nuestros países [...] (BORÓN, 2006, p.1).

A partir de las reflexiones de Borón, ya se puede colocar un primer elemento de juicio, cuando se busca entender las reacciones de la Administración Bush ante los cambios socio-políticos que han venido produciéndose en la región. ¿Percibe Estados Unidos que se ha fracturado en alguna medida su sistema de dominación hemisférica? ¿Por qué no ha reaccionado como podía esperarse, según la larga historia de reacciones violentas contra nuestros países? ¿Cuál parece ser la interpretación real de Estados Unidos sobre la evolución de los acontecimientos en América Latina? Avancemos con algunas respuestas.

Este tema de la poca importancia, indiferencia o falta de prioridad de América Latina para Estados Unidos ha sido siempre un recurso de manipulación en muy diversos sentidos. Para Juan Gabriel Tokatlián (2005, p.14), esa relación de “dominación-dependencia” se basa en la enorme asimetría de poder “como condición sistémica primordial que estimula el imperialismo y su despliegue”. Pero este factor, real e innegable, sólo expresa una dimensión del problema. De la temprana historia de Estados Unidos como nación, se extraen numerosos argumentos que sedimentaron las bases de las primeras “construcciones ideológicas” de Estados Unidos sobre América Latina. Mucho antes de la proclamación de la Doctrina Monroe (1823), Alexander Hamilton en algunos de sus escritos que pasaron a formar parte de las páginas de El Federalista, colocó un concepto geopolítico que ha pasado a ser un presupuesto central para cualquier agenda de relaciones con sus vecinos del Sur, el considerar a la entonces Hispanoamérica y los países del Caribe no como la simple frontera sur sino como la extensión, al sur, del Sistema Americano (HAMILTON; MADISON; JAY, 1994). Es precisamente ese atributo, que se fue imponiendo tras un largo proceso histórico de construcción de la hegemonía, lo que explica la determinación de al menos tres funciones permanentes para América Latina en la política exterior de Estados Unidos. La primera, vulgarmente atrapada bajo el despectivo término “traspatio”, realmente esconde el carácter inclusivo de la región en la proyección de Estados Unidos como potencia internacional primero, y posteriormente mundial. Siendo parte del Sistema Americano, somos parte de la proyección global de la política exterior de Estados Unidos; y veámoslo con un solo ejemplo de los tantos que se pueden señalar. El proyecto de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue la respuesta de Estados Unidos ante la Europa Unida del 1992 y las dinámicas de bloques económico-comerciales en Asia y el Pacífico. El tema tuvo tanta prioridad que lo presentó un Presidente republicano, Bush Padre, pero lo defendió ante el Congreso y logró su aprobación un demócrata, William Clinton; porque lo que se estaba defendiendo eran intereses estratégicos vitales para la nación. Primero, asumiendo los desafíos de incluir a México en el proyecto y después con la propuesta del ALCA, ¿era o no la región importante para los intereses económico-comerciales de Estados Unidos?

Una segunda función tiene que ver con el “Destino Manifiesto” que le ha correspondido a nuestra región, en tanto ejemplo de objetos de un sistema de dominación sobre un área geográfica determinada. Si Estados Unidos no es capaz de controlar sus problemas en casa, cómo va a convencer a otros de su liderazgo. Las políticas de Reagan hacia la Cuenca del Caribe, durante los años 1980, incluida la intervención militar en Granada, la “guerra de baja intensidad” en Centroamérica y las políticas contra Cuba, todas inmersas en el contexto de la estrategia global para acabar con la URSS y el campo socialista, ejemplifican lo afirmado.

La tercera función a mencionar está muy entrelazada con las anteriores, por haber utilizado en numerosas ocasiones América Latina y Caribe como un laboratorio para el ensayo de nuevas políticas: militares, diplomáticas, económicas, culturales, por sólo mencionar algunas. Este es un tema con mucha historia. En cuantas ocasiones el sur no ha puesto su territorio, su población y su medioambiente para ser contaminado por numerosas empresas estadounidenses. Pero hay un tema muy actual que nos hace recordar esa función: el tratamiento genocida y brutal de sus aliados, los dictadores militares, para extirpar mediante torturas inenarrables, asesinatos y chantajes a miembros de diferentes movimientos revolucionarios, sobre todo, durante los años 1960 y 1970 en el Cono Sur; o durante los años 1980 en Centroamérica. ¿Cuántos de esos mismos expertos de la CIA que asesoraron a esos genocidas no son los asesores o los autores de los libretos seguidos por los torturadores de Abu Ghraib, Guantánamo y el resto de las prisiones secretas estadounidenses?

Lo que hay que distinguir es que América Latina tiene una importancia permanente para la política exterior de Estados Unidos, aunque, puede ser o no una prioridad en una coyuntura determinada.

En suma, no es equivocado decir que América Latina y El Caribe no están dentro de las prioridades principales de la política exterior de la Administración Bush. Pero es un error sostener a priori que ello implique una pérdida de importancia o incluso que esa posición menos saliente tenga un efecto negativo en las relaciones de nuestros países con Estados Unidos (INSULZA, 2005, p.1).

Es cierto que en numerosas ocasiones, y hoy es así, América Latina no aparece como región entre las prioridades definidas en la política exterior estadounidense. En una lista de países prioritarios

para EUA, donde están Iraq, Afganistán, Corea del Norte, Irán, Palestina e Israel, China y Taiwán, Rusia y Sudán Occidental (Darfur), no aparece ningún país latinoamericano (INSULZA, 2005). Sin embargo, Laura Carlsen (2005, p.1) considera que, “[...] con todos los ojos puestos en el Medio Oriente, la región seguirá siendo una arena para intervenciones en crisis ad hoc, con Cuba y Colombia como puntos focales opuestos”.

Tal afirmación de la autora se basa en criterios muy objetivos. Cuba, que durante toda la Guerra Fría fue considerada una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a su activa presencia internacional, en particular en el llamado Tercer Mundo y su estratégica alianza con al URSS, pasó a ser etiquetada como un tema “doméstico” a partir de la post-Guerra Fría. Perdidas sus alianzas estratégicas y a la espera de una caída “efecto dominó”, que no ocurrió, se pierde de vista, sin embargo, el activismo y la influencia del lobby cubano-americano, en particular y directamente sobre la Casa Blanca, al margen de la propia atención particular del ejecutivo estadounidense por la isla. Entonces no es una prioridad medida en los términos convencionales, pero es un caso pendiente bajo una atención permanente. Una “deuda” con la racionalidad histórica del sistema de dominación hemisférico, más que con lo que puedan creerse en la Florida; todo ello bajo el juego que hoy también han tratado de aplicar a Venezuela de “mirar hacia el sur sin pensar en ti”. Un juego extremadamente peligroso para el que se lo crea.

Colombia, por su parte, es el tercer receptor de asistencia militar proveniente de Estados Unidos, después de Israel y Egipto, y representa el único reducto creíble de confrontación armada en el hemisferio. Su ubicación en el área Andina, vecina de procesos políticos tan importantes como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, reafirma la importancia estratégica sub-regional, que la llevó a ser objeto del “Plan Colombia” y sus siguientes. Además, Colombia es hoy, por razones muy particulares, incluido el enorme apoyo estadounidense, uno de los pocos modelos de derecha vencedores en las urnas. Ya con éstas razones, pueden encontrarse los argumentos para una posible reacción de Estados Unidos tomando como eje a ese país (CAICEDO; PADILHA; BECERRA, 2006).

Como nos recuerda Laura Carlsen (2005, p.2), con la segunda administración Bush, durante una audiencia ante el Comité de

Relaciones Exteriores del senado estadounidense, la Secretaria del Departamento de Estado, Condolezza Rice, reafirmó las posiciones asumidas durante el primer período de gobierno, reiterando

[...] su ofensiva contra Cuba y criticó severamente a la Venezuela de Hugo Chávez. Brasil fue citada como un socio crítico, México fue visto como un actor clave para fortalecer la competitividad global del bloque del TLCAN, los países andinos calificados de región vital con mucho potencial y el gobierno colombiano de Uribe alabado como un modelo de cooperación exitosa.

Ahora bien, teniendo en consideración que siempre esta presente un conjunto de argumentos, susceptibles de ser activados en el discurso político oficial, la conclusión a extraer es que América Latina y Caribe se han mantenido siempre en una constante oscilación para la política exterior estadounidense, entre percepciones de normalidad y de crisis; estableciéndose una clara distinción entre una y otra. Porque “[...] cuando un país o una situación son mirados como prioridad, existe una atención mayor de las autoridades, pero al mismo tiempo esa atención se da bajo el prisma de la crisis” (INSULZA, 2005, p.1).

Por tanto, hay que estar muy atento a las percepciones sobre crisis en las instancias de Washington decisorias sobre la región, que no están inactivas ni mucho menos. Tras los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, se realizaron conocidos esfuerzos por identificar aquellas áreas o países que debían ser ubicados dentro del esquema global de lucha contra el terrorismo. El primer problema a enfrentar fue la ausencia casi absoluta de conflictos armados creíbles en el hemisferio, salvo el caso de Colombia. El segundo fue que aunque los guerrilleros colombianos y cualquier otra insurgencia creíble recibieran el calificativo de terroristas, a los efectos prácticos esto no dejó de ser parte del discurso político tradicional; por lo que no existiendo ninguna organización ubicada dentro del concepto de “terrorista de alcance global”, como Al Qaeda, el tema no trascendió con seriedad el nivel de las especulaciones.

No obstante, se realizaron investigaciones sobre todo en torno al área de la llamada Triple Frontera – Argentina, Brasil y Paraguay –, históricamente conocida como punto de contrabando de mercancías y otras operaciones ilegales. En un informe dado a conocer por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos,

se reconocía que el gobierno de ese país no había logrado información fidedigna que confirmara la presencia organizada de Al Qaeda en la Triple Frontera; así como negaba la existencia de planes operativos terroristas en la región. Lo único que se ha podido comprobar es la existencia de personas que recaudan fondos para Hamas y Hezbollah, organizaciones a las que no se les conocen vínculos con Al Qaeda; además de que no operan fuera del Medio Oriente (KAHHAT, 2006, p.1).

A manera de conclusión de este análisis, alcanza toda su validez la afirmación de Isabel Jaramillo Edwards (2006) sobre la observancia de dos niveles en la política exterior de la segunda administración Bush hacia América Latina; uno, enmarcado en la estrategia general del país y el otro, relacionado con lo que la autora denomina intereses inmediatos y coyunturales – políticos, económicos o comerciales. Bajo ésta lógica, que legitima lo argumentado en torno al real papel y lugar que ocupa América Latina en la política exterior de Estados Unidos, quedan amparadas toda una serie de decisiones políticas importantes como el rediseño de la presencia militar estadounidense en la región – bases militares, programas de asistencia, entre otros –; el privilegio del bilateralismo; y el tratamiento especial a un conjunto de países claves para el mantenimiento del sistema de dominación hemisférica estadounidense.

Entre las autonomías y las turbulencias periféricas

Cuando Roberto Russell comenta sobre el error de algunos analistas al considerar irrelevante a América Latina, uno de los argumentos que coloca – citando a Abraham Lowenthal – es la dimensión estratégica que tiene la llamada Cuenca del Caribe para Estados Unidos. Recupera Russell (2006, p.55):

¿Cómo aplicar la tesis de la irrelevancia a la sub-región que incluye a México, América Central y El Caribe, cuya integración funcional a EEUU no hará más que incrementarse en los próximos años? Esta área, que representa sólo un tercio de la población total de América Latina y el Caribe, concentra casi la mitad de la inversión estadounidense en la región, representa más del 70% del comercio interamericano, casi el 60% de la presencia bancaria estadounidense en América Latina y alrededor del 85% de la inmigración latinoamericana en Estados Unidos.

Lowenthal (2006, p.71) amplía el criterio planteando que la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (1990), el TLCAN (1994) y el TLCCA-RD (2005) “[...] están reforzando esquemas claramente distintos. En este contexto, la Cuenca del Caribe y el Cono sur se mueven en sentidos opuestos en relación con EEUU, mientras que los países andinos también siguen un camino diferente [...]” y no olvidemos, como parte de este reforzamiento del control y sus mecanismos sobre el área, a la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), oficializada en marzo de 2005 por los Presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, como un proyecto destinado a reforzar los compromisos de los socios dentro del TLCAN, a partir de los intereses prioritarios de Estados Unidos, post 11 de septiembre. El complemento del ASPA sería el propagandizado Plan Puebla Panamá, con lo cual el perímetro estratégico estadounidense en la Cuenca del Caribe quedaría dotado de suficientes mecanismos de control y protección frente a otras iniciativas que no los contemplen (PRECIADO; HERNÁNDEZ, 2006).

Aquí ya se coloca este debate, comparando dos áreas muy bien delimitadas históricamente en las relaciones interamericanas. La primera, siempre bajo los mayores niveles de control y sujeción por parte de Estados Unidos; la segunda – vista como Sudamérica en su totalidad –, marcada tal vez por la socorrida percepción de ser un área marginada de los principales temas de la geopolítica internacional (PERROTI, 2005), en momentos en que la fisonomía socio-política sudamericana se presenta más cambiante y desafiante a la luz de los intereses estadounidenses.

Cabe apuntar, no obstante, la diferente naturaleza de las preocupaciones estadounidenses, que perciben amenazas derivadas de situaciones fuera de control provenientes de la Área Andina y de los países del Cono Sur, aun que en esos la situación no sea tan dramática. Como bien destacan Bonilla y Páez (2006, p.128), “[...] el arco andino sigue siendo la región latinoamericana con mayores niveles potenciales de conflicto, en términos estratégicos para Washington.” Esto es debido a que, a pesar de la dimensión particular que otorga Estados Unidos al tema colombiano, ninguno de los países andinos escapa a una percepción, sino de crisis, al menos de inestabilidad. Sin embargo, el Área Andina, como bien lo reflejan las estadísticas, no ha sido una de las más favorecidas por las relaciones con Estados Unidos. Según los autores mencionados: “Los intereses

de las sociedades andinas y de sus Estados tienen muy poco impacto en las decisiones de Estados Unidos. Actualmente, la región andina cuenta con menos del 13% del PIB latinoamericano, mientras que su población es el 22%; recibe menos del 10% de las inversiones estadounidenses y expresa menos de 13% del intercambio comercial con Estados Unidos al sur del Río Grande" (HEY, 1995, p.76 apud BONILLA; PÁEZ, 2006, p.138).

La naturaleza de las preocupaciones de Estados Unidos sobre los países del Cono Sur – que serían los del MERCOSUR a los efectos del análisis – es de otra índole. Existe un diferendo generado por las dispares posiciones con respecto a temas medulares contemplados en la propuesta estadounidense del ALCA; sobre todo lo referido a subsidios agrícolas, patentes, textiles y determinadas tecnologías “de punta”. Encabezando esas posiciones divergentes han estado Brasil, Argentina y Venezuela, con su aspiración de ser miembro pleno del MERCOSUR. Como se recordará el momento de mayor fricción entre ambas partes ocurrió durante la IV Cumbre de las Américas desarrollada en Mar del Plata, Argentina en noviembre de 2005. De ese encuentro hay que recordar, primero, el importante consenso político anti-ALCA que se hizo evidente; segundo, la generalizada percepción de fracaso que acompañó al proyecto ALCA – al menos en su diseño original – post Cumbre de Mar del Plata; y tercero, que a raíz de los acontecimientos ocurridos, Estados Unidos pasó a reformular su estrategia de libre comercio, dejando a un lado su proyecto multilateral y pasando a privilegiar los TLCs, a partir de negociaciones bilaterales. Sobre este último recurso y sus consecuencias para América Latina nos comenta James Petras (2006, p.1-2):

Estados Unidos ha establecido acuerdos bilaterales de libre comercio con Perú, Colombia, América Central, México, Chile, Uruguay y la mayoría de los Estados del Caribe. Lo que es significativo respecto a estos acuerdos es que Washington no tuvo que hacer concesión alguna en su sector de exportaciones agrícolas fuertemente subvencionado ni tuvo que levantar sus cuotas a más de 200 productos. Por otra parte, Washington obtuvo entrada libre en los sectores financieros, de servicios, alta tecnología, sanidad, educación y mediático de sus homólogos. En una palabra, los acuerdos comerciales bilaterales fueron enormemente asimétricos y beneficiosos para las multinacionales estadounidenses y los productores nacionales no competitivos.

Sin embargo, el momento posterior a Mar del Plata no ha sido todo lo halagüeño que esperaban los países miembros de la CAN y del MERCOSUR en lo que a esfuerzos viables de integración; ya no sólo pensando en sus propios esquemas sub-regionales, sino en otras iniciativas supranacionales como el ALBA y la hoy denominada Unión Sudamericana de Naciones. Como ya se afirmó, ésta realidad ha cambiado muy poco o nada hasta el presente. Los problemas al interior tanto de CAN como de MERCOSUR son evidentes y sin soluciones a corto plazo; lo cual tiene serias implicaciones sobre todo proyecto sudamericano de integración. Una revisión interna de CAN nos dice que la salida de Venezuela y su incorporación plena al MERCOSUR, a mediados del 2006, son solo dos de tantos otros problemas. Se suman los desafíos que enfrentan para llevar adelante sus programas de gobierno tanto Evo Morales en Bolivia, como Rafael Correa en Ecuador, ambos cercanos a los planteamientos políticos de Chávez, incluido lo referido al ALBA; Perú, con el segundo mandato de Alan García, tratando de intercambiar más recetas neoliberales por oxígeno económico estadounidense, por lo que ya enfrenta las primeras reacciones sociales; y Colombia, manteniendo su alianza estratégica con Estados Unidos, pero manejando determinados intereses geo-estratégicos con Venezuela y sus vecinos.

En particular sobre el MERCOSUR, como bien se decía, los problemas tienen orígenes históricos y emergen desde el interior de sus países, tanto por su racionalidad política como por sus visiones externas. Brasil y Argentina han sido tradicionales rivales; aunque las pretensiones de liderazgo regional de Brasil han sido constantes. La profunda crisis socio-económica y política que estalló a finales del 2001, llevo a Argentina a una inmersión profunda en sus problemas domésticos, mientras Kirchner desarrollaba una política exterior basada en la negociación con los organismos internacionales, la búsqueda de nuevos socios comerciales y la concertación política.

Cualquier aproximación al MERCOSUR, en términos económicos, nos dice de la división interna en al menos dos segmentos de países marcados por profundas asimetrías. Este es un problema que se ha agudizado; y el diferendo argentino-uruguayo por las "papeleras" o el propio debate que envuelve al gobierno de Tabaré Vázquez, en torno a la firma o no de un TLC con Estados Unidos, son expresiones de la inconformidad de los

pequeños estados miembros con el rumbo de los acontecimientos y la incapacidad demostrada hasta ahora por los “líderes” del grupo para encontrar alternativas que los incluyan a todos.

La inclusión de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR, pendiente de ratificación por los Congresos de Brasil y Paraguay, vino a colocar un componente político, con nuevos desarrollos al interior del esquema. De hecho, ha ocurrido una concertación estratégica entre Argentina y Venezuela, a partir de proyectos energéticos y financieros, principalmente, lo cual generó lógicas preocupaciones en Brasilia y Washington. Quizás en el clímax de esas preocupaciones estuvo Mar del Plata, pero a pesar de algunos comentarios oficiales e incluso de ser calificado por algunos como “populista”, con la intención de identificarlo con las críticas que dedican a Chávez, en la práctica, se evidenció que el Presidente argentino lo que ha pretendido es un replanteamiento de la política exterior de su país, suprimiendo la anterior sumisión de la era Menem por la construcción o mejor decir reconstrucción de otra. Al decir de Tokatlián (2005), buscando determinar los alcances y límites reales del país, se precisa una opción estratégica innovadora para Argentina, o postergar, bajo la lógica del disenso paralizante, la definición de la misma. En últimas, se trata de saber si todavía hay un espacio elemental de control de nuestro destino interno y externo.

En la medida en que el ALBA se ha ido consolidando y avanzando en sus diferentes proyectos energéticos, financieros, educacionales y de salud, entre otros; y el Presidente Chávez ha asumido un mayor protagonismo regional, la oposición de Estados Unidos a ese liderazgo se ha hecho convergente con las históricas pretensiones brasileñas de liderazgo sudamericano, que en la actualidad se ven alimentadas por otras aspiraciones en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con el G-20 y la pretensión de un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, para lo cual Brasil trabaja incansablemente. Sería poco objetivo hablar de una subordinación automática de Brasil a Estados Unidos. Esa lógica política quedó bien atrás en el tiempo, cuando la sustituyó el Presidente Ernesto Geisel, en los años 1970, por un llamado pragmatismo ecuménico y responsable, que hoy disfruta de plena madurez. Lo que sí ha ocurrido es lo que Mónica Hirst (2006, p.132-133) ha denominado como el inicio de

una “etapa afirmativa de diálogo con Estados Unidos”, descrita por la investigadora brasileña en los siguientes términos:

Así Brasil se mostró dispuesto a ampliar sus responsabilidades internacionales, estimuló nuevas coaliciones con potencias regionales, asumió un fuerte protagonismo en las negociaciones comerciales globales – comandó la creación del Grupo de los 20 [G-20], reafirmó sus aspiraciones para obtener altos cargos en la burocracia internacional y otorgó una máxima prioridad a su candidatura para un lugar permanente en una eventual ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Según Hirst (2006), esa nueva relación con Estados Unidos se ha construido al asumir Brasil “nuevas responsabilidades en situaciones de riesgo institucional”, concepto que acoge las gestiones mediadoras en situaciones internas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en diferentes momentos; así como la creación del Grupo de Amigos de Venezuela, en el 2003, o el envío de militares brasileños a Haití, como parte de las fuerzas internacionales encargadas de garantizar la paz.

En cuanto a Chávez, que ha pasado a ser el gran antagonista de Estados Unidos en la región, incluso antes de ocurrir la enfermedad del Presidente cubano Fidel Castro, el gran antagonista histórico, no ha sido nunca favorecido por lo medios políticos estadounidenses. Muchas pueden ser las razones. Una de ellas puede basarse en el hecho de que el gobierno de Chávez ha fracturado el sistema político tradicional venezolano, colocando en la oposición a los sectores políticos y empresariales aliados históricos de Estados Unidos. Como resultado de lo anterior, una segunda razón puede estar en las percepciones de inseguridad sobre los abastecimientos de energéticos provenientes de Venezuela – aproximadamente el 15% del petróleo crudo que importa Estados Unidos – debido a la transformación que ha sufrido PDVSA y la industria petrolera, en general, ahora bajo control estatal. Mientras que una tercera razón podría estar girando en torno a los principales contenidos del liderazgo venezolano, con el rescate del nacionalismo bolivariano, una visión anti-imperialista de los problemas socio-económicos acumulados en la región; y una redefinición de amigos y aliados sobre la base de sus proyecciones frente al sistema de dominación imperante, lo que facilitó una concertación estratégica entre Venezuela y Cuba.

El debate sobre las izquierdas en América Latina: entre la emancipación y las reformas

El término izquierda, entendido como denominación histórica de la tendencia política que se ha alzado históricamente defendiendo los intereses de los trabajadores asalariados, campesinos, de los desposeídos en general, en la lucha contra las clases explotadoras capitalistas, ha sufrido tantas interpretaciones como proyectos políticos puedan haber sido enarbolados por determinados grupos humanos, triunfantes o no. Una razón fundamental que explica ese hecho es la particularidad que encierra cada caso, las condiciones objetivas y subjetivas que se conjugan en un país determinado, y que pueden dar lugar a un cambio social protagonizado por fuerzas de izquierda. Con el pasar del tiempo y en particular después de la caída del campo socialista este-europeo, la interpretación de la visión sobre la izquierda se ha ido flexibilizando; pasando de la idea de la construcción de una sociedad comunista, como meta final e ineludible, anticapitalista por esencia, a una interpretación política más acorde con los tiempos de cambios, indefiniciones y frustración que han predominado en la realidad socio-política imperante. En no pocos casos, las diferencias entre ser de izquierda y ser progresista quedaron diluidas; e incluso aún teniendo claridad en las diferencias que los distinguen, determinados sectores de opinión, en particular algunos medios de prensa, han ubicado a la social-democracia dentro del espectro de la izquierda latinoamericana contemporánea, bien por una falsa interpretación de ambas o bien por la conveniencia política para determinados sectores de poder. No obstante, veamos que opinan sobre la izquierda algunas autoras reconocidas. Por ejemplo, para Beatriz Stolowicz (2005, p.171):

[...] la esencia identitaria de la izquierda es la búsqueda de la emancipación humana, que no es posible sin igualdad social. Desde la segunda mitad del siglo XIX, esa búsqueda está asociada a una crítica al capitalismo y al propósito de construir una sociedad sin explotación ni dominio de una minoría sobre la mayoría.

Por su parte, Marta Harnecker (2004, p.142) asume un concepto más amplio cuando entiende a la izquierda como:

[...] el conjunto de fuerzas que se oponen al sistema capitalista y su lógica del lucro y que luchan por una sociedad alternativa humanista

y solidaria, construida a partir de las clases trabajadoras, libres de la pobreza material y de las miserias espirituales que engendra el capitalismo. La izquierda no se reduce, entonces, a la izquierda que milita en partidos u organizaciones políticas de izquierda, sino que incluye a actores y movimientos sociales.

Pero, si bien es muy importante reconocer la presencia dentro de la izquierda de los movimientos y actores sociales; siendo una realidad el hecho de no dogmatizar el papel de los partidos políticos – en la visión tradicional –, aunque reconociendo su rol como un actor político capaz de encausar las luchas emancipatorias, no se puede perder de vista las limitaciones propias de los primeros y los valores que, en términos de organización, táctica, estrategia política y disciplina para la acción, aportan los segundos. Por eso la necesidad de las alianzas políticas y de la existencia de un ente determinado, llámese partido o movimiento, que sea la estructura capaz de reunirlos, organizarlos y conducirlos en la lucha por sus reivindicaciones. Hay que entender que no se puede construir un presente, partiendo del presupuesto de borrar el pasado, sino asimilando todo lo rescatable que ayude a hacer alcanzables metas inaccesibles en otros tiempos, que hoy sí se pueden lograr, como lo ha demostrado el actual escenario latinoamericano.

Más allá de lo antes señalado, hay que destacar algunos otros elementos presentes en el debate actual sobre la izquierda en la región. Uno emerge de lo señalado por Harnecker (2004), referido al reconocimiento de la izquierda no partidista, es decir, la que se incluye en los diferentes movimientos sociales; y el otro, la permanente discusión en torno a cómo enfrentar el tema de la lucha contra el capitalismo, tanto en la teoría como en la praxis. El primer elemento coloca un tema de mucha actualidad, que ha provocado divisiones dentro de las fuerzas de izquierdas. Sobre todo por la ya mencionada crisis de representatividad de los partidos políticos. Para las izquierdas, el panorama se ve agravado por el sectarismo de algunos partidos históricos, que decidieron no sumarse a los cambios políticos en sus países, por considerarlos insuficientes, pero prefiriendo una posición de crítica total, en lugar de buscar espacios, influyendo desde dentro de los nuevos procesos.

El otro aspecto es sumamente polémico y está expuesto por completo a múltiples interpretaciones. En tiempos en que perdió credibilidad la vía de la lucha armada y el papel de los partidos

políticos está cuestionado, en sociedades con un manifiesto déficit de gobernabilidad, ¿qué hacer?, ¿una revolución anticapitalista o adoptar un «paquete» de reformas políticas para generar una alternativa a lo existente?

Para avanzar algunas respuestas se puede partir de la determinación de los problemas sobre los que se debe actuar con la evaluación de las opciones y posibilidades en cada caso. En este sentido, una vía para abordar el tema puede ser identificando grupos de problemas: el primero puede abarcar algunos contenidos generales, tradicionales de la sociedad latinoamericana, como sus presupuestos filosóficos, ideológicos, políticos, éticos y su herencia histórica y cultural. Un segundo grupo de problemas sería dedicado al análisis de los impactos del sistema de dominación regional de los Estados Unidos. El tercero se centraría en el abordaje de un problema central: ¿qué alternativa seguir, socialismo o capitalismo? Por supuesto, profundizando en los contenidos de cada opción.

El primer grupo de problemas es crucial, porque es el que puede ayudar a tipificar los escenarios a los que puede estar abocado un país, ya sea estallido social o un simple recambio electoral, según sea el caso; y las condiciones de las fuerzas políticas implicadas, su signo ideológico, base social, plataforma política, la correlación entre estas y otras fuerzas políticas actuantes. El segundo grupo de problemas, a pesar de ser imaginado como externo, tiene y ha tenido realmente un nivel de incidencia decisivo en nuestras sociedades. Y los costos y beneficios quedan muy claros cuando la disyuntiva es confrontar o negociar con Estados Unidos. En el primer caso, quedaría totalmente expuesto a variados escenarios de conflicto con ese país, sin descartar variables violentas, incluidas las militares, de las más diversas formas. Para enfrentar el tercer grupo de problemas, habría que comenzar por preguntarse qué tan preparadas están nuestras sociedades para asumir un proyecto socialista, sostenible y defendido, conscientemente, por la mayoría de la población. Por eso el gradualismo de las metas a alcanzar resulta un factor crucial: la lucha contra el neoliberalismo, con todos los desafíos y consecuencias que esto entraña; segundo, la lucha por romper con el esquema tradicional de dominación impuesto por Estados Unidos; y tercero, decidir si se mantiene buscando opciones desde dentro de los márgenes del capitalismo o pasar a construir una sociedad socialista.

Pero, ¿es esto lo que está ocurriendo en América Latina hoy? Para que se tenga una idea de lo complejo que se presenta el panorama para la izquierda, no olvidemos que la caída del llamado socialismo real, la desmovilización de la inmensa mayoría de los movimientos armados, el reposicionamiento a determinados niveles de la socialdemocracia internacional, amén de estrategias seguidas por otras fuerzas de derecha, laicas y religiosas, son todos factores convergentes en el nuevo escenario político latinoamericano.

Sobre este polémico y complejo tema, Roberto Regalado Alvarez (2006a, p.211) aporta la siguiente perspectiva de análisis:

Debido a la asociación conceptual existente entre: por una parte, lucha armada y revolución social y, por otra, lucha electoral y reforma del capitalismo, desde la derrota de la Revolución popular sandinista, el debate político e ideológico de la izquierda latinoamericana se inclinó a favor de la reforma y en contra de la revolución. Como resultado ya no se habla de izquierda revolucionaria sino de izquierda transformadora. Sin embargo, el llamado Nuevo Orden Mundial no sólo está concebido para impedir la revolución socialista sino también la reforma social progresista del capitalismo, por lo que el problema de la estrategia y la táctica de la izquierda se replantea una y otra vez.

Como parte de este debate y en alusión a un grupo de nuevos líderes políticos latinoamericanos, dice Marcelo Colussi (2005):

¿Son 'traidores', 'vendidos' al 'capitalismo'? Eso es una consigna principista que no pasa de discurso emotivo falto de profundidad analítica. La izquierda constitucional hace lo que puede; y hoy, en los marcos de la post Guerra Fría, con el triunfo de la gran empresa y el unipolarismo vigente – más aún en la región latinoamericana, histórico 'patio trasero' de la superpotencia hegemónica – es poco lo que tiene por delante: si deja de pagar la deuda externa, si piensa en plataformas de expropiaciones y poder popular y se atreve a armar a sus pueblos, sus días están contados. Pero Kirchner, Lula, Vázquez o Lagos ¿hablaron en algún momento de revolución socialista en sus campañas proselitistas? ¿Levantó alguno de ellos las mismas consignas que, tres décadas atrás, proponían los movimientos armados que, sin ningún complejo ni temor, hablaban de comunismo y de confiscaciones, y a los que

directa o indirectamente ellos pertenecían o apoyaban? Sin lugar a dudas que no.

Y tiene razón en su análisis, de ahí la validez de la conclusión que nos aporta Regalado Alvarez (2006a, p.213), cuando afirma que la crisis multidimensional que sufre hoy la sociedad latinoamericana,

[...] sólo ha repercutido en triunfos de candidatos presidenciales de izquierda en los países donde, o bien se quebró la institucionalidad democrático liberal, como ocurrió en Venezuela, o bien las fuerzas de izquierda contaban con una acumulación política y social que les permitió capitalizar a su favor, el desgaste de la derecha, como en los casos de Brasil y Uruguay.

Estas determinaciones resultan fundamentales porque, al menos, ayudan a distinguir los procesos políticos de izquierdas que están en curso, en relación con un primer problema crucial: el histórico sistema de dominación impuesto por los Estados Unidos en la región. Porque los procesos políticos liderados hoy por las izquierdas en América Latina no son procesos anticapitalistas, y está lejos aún en el horizonte de alguno que se lo haya planteado como meta final. Aquí vale una observación con respecto al caso de Bolivia, con el gobierno de Evo Morales. Porque si bien este proceso político se ha propuesto y está rompiendo la institucionalidad democrático liberal, es verdadero también que aun se encuentra en un nivel de desarrollo más primario, con las características particulares de una sociedad que tiene que buscar soluciones, primeramente, a los profundos problemas sociales existentes, para después pasar a plantearse nuevas metas estratégicas. La siguiente reflexión de Regalado Alvarez (2006a, p.213) sobre Venezuela aporta elementos esenciales para poder establecer las diferencias entre ambos procesos políticos:

[...] Sólo en la elección presidencial de Chávez existe un vínculo directo entre la fractura del sistema político institucional, el auge del movimiento social y el ascenso al gobierno de una fuerza política popular, en circunstancias en las que pudo romper con una parte de las ataduras impuestas por el esquema de dominación.

Lo que se confirma con las siguientes reflexiones de Beatriz Stolowicz (2005, p.173-174):

El nuevo tercerismo es una estrategia político-ideológica de conservación del capitalismo, que busca desligarlo del desprestigio del neoliberalismo y preservarlo de crisis sociales y políticas. Tiene como objetivo neutralizar la potencialidad de cambio de los proyectos alternativos de la izquierda partidaria y social [...] Es una estrategia de los sectores dominantes para neutralizar a una izquierda que crece en convocatoria social y electoralmente, para 'modernizarla como centro', es decir, hacerla 'moderada' en sus fines. La eficacia ideológica de la estrategia está en que encubre el objetivo de la moderación de los fines bajo la forma de la moderación de los medios, lo que se presenta como 'realismo'.

¿Quiere esto decir que está mediatizado el proceso de cambios sociopolíticos en la región? No porque, con independencia de las similitudes de estos gobiernos y otros que están surgiendo, América Latina está viviendo un momento muy particular de su historia. Ya Cuba dejó de ser la excepción revolucionaria, al margen de la existencia o no de otros modelos socialistas; ya las izquierdas están aprendiendo a conquistar el poder político por medio de las urnas, más allá de sus tonalidades; ya los pueblos aprendieron a derrocar presidentes corruptos, ya esa clase política corrupta y entreguista sabe que puede ser derrocada; y ya los Estados Unidos tendrán – con más opciones de hacerlo para el sucesor de Bush – que aceptar las nuevas fórmulas políticas que recibe de la región, que van tejiendo una nueva agenda política interamericana más moderada o más contestataria, pero, sobre todo, propia.

OLIVA CAMPOS, Carlos. Latin American after the cold war: the new social, political and regional re-configuration. *Perspectivas*, São Paulo, v.33, p. 15-61, jan./jun. 2008.

■ **ABSTRACT:** *This article intends to comprehend the social moves and the political changes in the Latin American in the two last decades, with the purpose of demonstrating that all those movements were the expression of the exhausted traditional power structures, and their incapacity to responding all the demands of the majority of Latin-American people. The social movements arising as well the new political forces will be also focused in this text. This work still examines the factors that conducted to the changes, as much the objectives and the subjectives ones, that have had contributed to create a new social and political configuration at the beginning*

of the XXI century. The perspective of the next presidential polls as well the results that came out of the last electoral cycle are discussed here in order to conceive how the progressives forces and the social movements in the region are influenced by this process and the US X Latin American relations.

■ **KEYWORDS:** Latin American. Cold War. Neoliberalism. Left-angle in crisis. The Résistance. New social actors.

Referências

BONILLA, A.; PÁEZ, A. Estados Unidos y la región andina: distancia y diversidad. *Revista Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n. 206, p.126-139, nov./dic. 2006. Disponible en: <http://www.nuso.org/upload/articulos/3395_1.pdf>. Acceso en: 22 ene. 2007.

BORÓN, A. A. La mentira como principio de política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. *Foreign Affairs En Español*, México D.F., v.6, n.1, enero-marzo 2006. Disponible en: <<http://www.foreignaffairs-esp.org>>. Acceso en: 12 oct. 2007.

BUXTON, J. Política económica y ascenso de Hugo Chávez al poder. In: ELLNER, S; ELLINGER, D. (Ed.). *La política Venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto*. Caracas: Nueva Sociedad, 2003. p.146-155.

CAICEDO, J.; PADILLA, N.; BECERRA, G. Avances y desafíos de la unidad: experiencias electorales en Colombia. *Contexto Latinoamericano: Revista de Análisis Político*, n.1, p.54-67, sep./dic. 2006.

CAMPIONE, D. Prólogo. In: MAZZEO, M. *Piqueteros: notas para una tipología*. Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas: Manuel Suárez Editor, 2004. p.16.

CARLSEN, L. El segundo gobierno de Bush en América Latina más de lo mismo. *Pensamiento Crítico*, Madrid, 2005. Disponible en: <<http://www.pensamientocritico.org/laucar0205.htm>>. Acceso en: 15 sep. 2006.

COLUSSI, M. Relaciones Estados Unidos-América Latina. *Rebelión*, 19 sept. 2005. Disponible en: <<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20268>>. Acceso en: 15 oct. 2005.

EDWARDS, I. J. La política exterior de la administración GW Bush y los referentes históricos. *Cuba Socialista*: revista teórica y política, Ciudad de La Habana, marzo 2006. Disponible en: <<http://www.cubasocialista.cu/texto/cs0220.htm>>. Acceso en: 2 oct. 2006.

GAMBINA, J. La economía argentina entre 1996-2006. *Periferias*: Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, año 11, n.14, p.15, primer semestre 2007.

HAMILTON, A.; MADISON, J.; JAY, J. *El Federalista*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994. p.41-49.

HARNECKER, M. *Venezuela una revolución sui géneris*. Caracas: Ministro de Estado para la Cultura: Consejo de Estado para la Cultura, 2004.

HIRST, M. Los desafíos de la política sudamericana de Brasil. *Revista Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n.205, p.131-140, sep./oct. 2005. Disponible en: <http://www.nuso.org/upload/articulos/3395_1.pdf>. Acceso en: 22 ene. 2007.

INSULZA, J. M. La cooperación hemisférica en la segunda administración Bush. *Foreign Affairs en Español*, México D.F., v.5, n.1, enero-marzo 2005. Disponible en: <<http://www.foreignaffairs-esp.org>>. Acceso en: 12 oct. 2007.

KAHHAT, F. América Latina, Medio Oriente y Estados Unidos. *Foreign Affairs en Español*, México D.F., v.6, n.4, oct./dic. 2006. Disponible en: <<http://www.foreignaffairs-esp.org>>. Acceso en: 2 oct. 2007.

LOWENTHAL, A. F. De la hegemonía regional a las relaciones bilaterales complejas: Estados Unidos y América Latina a principios del siglo XXI. *Revista Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n.206, p.63-77, nov./dic. 2006. Disponible en: <http://www.nuso.org/upload/articulos/3395_1.pdf>. Acceso en: 22 ene. 2007.

MARTÍNEZ, O. El neoliberalismo en su laberinto. In: MARTÍNEZ, O. et al. *Economía Mundial: los últimos 20 años*. Ciudad de La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2002. p.26-28.

OLIVACAMPOS, C. Estados Unidos y el proceso de democratización regional en América Latina. *Revista Cubana de Ciencias Sociales*, Ciudad de La Habana, n.28, p.32-48, 1994.

ORTEGA, M. Zapatismo y Sexta Declaración de la selva Lacandona. *Trabajadores: Revista de análisis y debate de la clase trabajadora*, México D.F., año 9, n.49, p.18-21, jul./ago., 2005.

PEROTTI, J. La globalización y la regionalización de la seguridad internacional: América Latina frente a los debates y dinámicas de los nuevos desafíos y complejidades de la realidad mundial, *Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Defensa y Seguridad*, 2005. Disponible en: < <http://www.caei.com.ar/es/programas/dys/globalizacion.pdf>>. Acceso en: 29 ene. 2006.

PETRAS, J. *Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: rupturas, reacción y la ilusión del tiempo pasado*. *Rebelión*, 14 nov. 2006. Disponible en: <<http://www.rebellion.org/noticia.php?id=41202>>. Acceso en: 15 nov. 2006.

PONCE, A. Simultaneidad regional del proceso latinoamericano, bloque de integración continental y rebelión forajida en Ecuador. In: Seminario Regional América Latina hoy: la reconfiguración sociopolítica regional y las posibles reacciones de Estados Unidos, 2005, Ciudad de La Habana. Ponencia. Ciudad de La Habana: AUNA-Cuba, 09 de junio 2005.

PRECIADO, J.; HERNÁNDEZ, J. 2005: ASPAN y la nueva agenda de la integración norteamericana siguen dejando fuera a la migración, In: OLIVA CAMPOS, C. L. *Anuario de integración latinoamericana y caribeña*. Ciudad de La Habana: REDIALC-UNESP-CEA; Araraquara: Laboratorio Editorial FCL-UNESP, 2006. p.106.

RAJLAND, B. A diez años (¿de qué?). *Periferias: Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, año 11, n.14, p.41, primer semestre 2007.

REGALADO ALVAREZ, R. *América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda*. Ciudad de La Habana: Ocean Press, 2006a.

_____. Cuando, cómo y por qué surge el Foro de Sao Paulo. *Contexto Latinoamericano: revista de Análisis Político*, n.1, p.163-178, sep./dic. 2006b.

RUSSELL, R. América Latina para Estados Unidos: ¿especial, desdeñable, codiciada o perdida?, *Revista Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n.206, p.48-62, nov./dic. 2006. Disponible en: <http://www.nuso.org/upload/articulos/3394_1.pdf>. Acceso en: 22 ene. 2007.

SANTOS, T. dos: *Do terror à esperança: auge e declínio do neoliberalismo*. Aparecida: Ideas & Letras, 2004.

STEDILE, J. P. *Brava gente: la lucha de los sin tierra en Brasil*. Ciudad de La Habana: Editorial Caminos, 2001.

STOLOWICZ, B. Uruguay, ¿triumfo de la izquierda o del centro? In: URUGUAY de la utopía al poder. Quito: Ediciones La tierra: Fundación Vivian Trías: Ediciones de la Banda Oriental del Uruguay, 2005.

TOKATLIÁN, J. G. Kirchner y la política exterior: entre Ibn Khaldun y Stephen Walt. 2005. Disponible en: <http://www.seguridadregional-fes.org/upload/3196-001_g.pdf>. Acceso en: 15 feb. 2006.

_____. Las relaciones Estados Unidos- América Latina: la sombra del proconsulado. In: MESA, M.; GONZÁLEZ BUSTELO, M. *Cartografías del poder: hegemonía y respuestas: Anuario CIP 2005*. Barcelona: Icaria; Madri: CIP-FUHEM, 2005. Disponible en: <<http://www.unizar.es/cooperacion-desarrollo/materiales/Anuario05.pdf>>. Acceso en: 12 oct. 2007.

VÁZQUEZ, T. El Uruguay social. In: URUGUAY de la utopía al poder. Quito: Ediciones La tierra: Fundación Vivian Trías: Ediciones de la Banda Oriental del Uruguay, 2005. p.101-102.

VILABOY, S. G. *Breve historia de América Latina*. Ciudad de La Habana: Editorial de Ciencias sociales, 2006.

VILAS, C. M. Pobreza, desigualdad y sustentabilidad democrática: el corto ciclo de la crisis argentina. *Revista Mexicana de Sociología*, México D.F., año 67, n.2, p.229-269, abr./jun. 2005.

ZIBECHI, R. *La Jornada*, México D.F., p. 5, 7 oct. 2005.

